

Universidad de Huánuco
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO INMEDIATO Y LAS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA PROCESAL PENAL
EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN - TOCACHE, 2016.

Para optar el Título Profesional de
ABOGADO

TESISTA

FLORES FRANCISCO, Liz Jhanet

ASESOR

Mtro. ALFREDO MARTEL SANTIAGO

Huánuco - Perú
2018



RESOLUCIÓN N° 631-2018-D-CFD-UDH
Huánuco, 05 de octubre de 2018

Visto, la solicitud con ID 187612-0000006370 de fecha 30 de julio de 2018 presentado por la Bachiller **FLORES FRANCISCO Liz Jhanet**, quien pide se Ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO INMEDIATO Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN – TOCACHE, 2016"** para optar el Título profesional de Abogado y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 246-2018-D-CFD-UDH de fecha 14 de mayo del 2018 se aprueba el Informe final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO INMEDIATO Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN – TOCACHE, 2016"** formulado por la Bachiller **FLORES FRANCISCO Liz Jhanet**, del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, quien posteriormente fue declarada **APTO** para sustentar dicha investigación;

Que, estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y a lo establecido en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; y la facultad contemplada en la Resolución N° 795-2018-R-CU-UDH, de fecha 13 de julio de 2018;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR Y DESIGNAR a los miembros del Jurado de Tesis para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, **FLORES FRANCISCO Liz Jhanet** para optar el Título profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis), a los siguientes docentes:

Abog. Hugo Ovidio Vidal Romero	: Presidente
Abog. Jesús Delgado y manzano	: Vocal
Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe	: Secretario

Artículo Segundo.- SEÑALAR el día viernes 26 de octubre del año 2018 a horas 9.00 a.m. dicha sustentación pública se realizará en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Mg. FERNANDO COCCINO BARRUETA
DECANO



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 9:00 a.m. horas del día 26 del mes de octubre del año 2018, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad Universitaria La Esperanza, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió el Jurado Ratificado integrado por los docentes:

Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado : (Presidente)
Abog. Hugo Ovidio Vidal Romero : (Vocal)
Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe : (Secretario)

Nombrados mediante la Resolución N° 631-2018-D-CFD-UDH de fecha 05 de octubre de 2018, para evaluar la Tesis intitulada **"LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO INMEDIATO Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTÍN - TOCACHE, 2016"** presentado por la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, **FLORES FRANCISCO Liz Jhanet** para optar el Título profesional de Abogado.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) APROBADO por UNANIMIDAD con el calificativo cuantitativo de SUFICIENTE y cualitativo de BOC.

Siendo las 11:50 horas del día 26 del mes de OCTUBRE del año 2018, los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.

Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado
PRESIDENTE

Abog. Hugo Ovidio Vidal Romero
VOCAL

Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe
SECRETARIO

DEDICATORIA

En primer lugar a nuestro amado Dios, por ser mi guía, mi fortaleza; a mis padres con todo el cariño, por su amplia comprensión y apoyo moral en mis estudios.

A mi esposo Jackson Kelvin mi compañero y sobre todo amigo, que siempre ha creído en mí y me ha apoyado en todo, A mi hija Jaziel con todo mi amor.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer en primer lugar a mi alma mater la Universidad de Huánuco, a mis distinguidos docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas por su prédica académica e invaluable aporte en mi formación profesional.

Mi agradecimiento a mi asesor el Mg. Alfredo Martel Santiago, quien, con su esfuerzo y paciencia, logramos cumplir con los objetivos propuestos con el presente trabajo de investigación.

La investigadora.

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice	iv
Resumen	vi
Introducción	ix

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema	11
1.2. Formulación del problema	12
1.3. Objetivo general	13
1.4. Objetivos específicos	13
1.5. Justificación de la Investigación	13
1.6. Limitaciones de la Investigación	14
1.7. Viabilidad de la Investigación	14

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 Antecedentes de la investigación	15
2.2 Bases teóricas	17
2.3 Definiciones conceptuales	39
2.4 Hipótesis	40
2.5 Variables	41
2.5.1. Variable dependiente	41
2.5.2. Variable Independiente	41
2.6 Operacionalización de variables (Dimensiones e Indicadores)	41

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación	42
3.1.1. Enfoque	42
3.1.2. Alcance o Nivel	42
3.1.3. Diseño	42
3.2. Población	43
3.3. Muestra	43
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación	44

3.4.1. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos	44
3.4.2. Técnicas e instrumentos para el procesamiento datos	44
3.4.3. Técnicas e instrumentos para la comunicación de resultados	44

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Procesamiento de datos.	45
-----------------------------	----

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Presentación de la Contrastación de los Resultados	61
Conclusiones	64
Recomendaciones	66
Referencias Bibliográficas	67
Anexos	70

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión del problema de la imputación necesaria en el proceso inmediato y las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en el nuevo modelo procesal peruano, criticando la falta de buenas imputaciones penales por parte del Ministerio Público que ha asumido el rol persecutorio del delito aperturando investigaciones con acusaciones diversas donde incluso se han hecho imputaciones de hechos con calificaciones jurídicas diversas donde no se ha tenido cuidado en describir las proposiciones fácticas y el subtipo penal o modalidad típica descrita en la norma penal.

La presente investigación trata de procesar información que sea importante y referida sobre la imputación necesaria del hecho punible como una *conditio sine quantum* para posibilitar el ejercicio real de la defensa, por lo tanto, tiene que ser definida y configurada para materializar una resistencia idónea. El imputado solo puede defenderse de una imputación definida, solo desde esta perspectiva, se comprende por qué el objeto del proceso está definido por la imputación del hecho punible - pretensión punitiva, y el objeto del debate por la oposición.

Asimismo, se pretende que el operador jurídico, ante hechos con alguna connotación penal, realice una calificación jurídica, teniendo claramente delimitado los hechos, establezca el grado de participación e intervención, circunstancias de modo lugar y tiempo, para que el pretensor pueda dirigir óptimamente una investigación y el imputado ejerza cabalmente su derecho de defensa. Por ello, la imputación necesaria o concreta, es el deber de la carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural, un hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal. Así, se ha logrado a la fecha ofrecer una visión y el resultado de trabajo diferente, más eficiente, para enfrentar antiguos problemas, así, también la ineficacia de una investigación, las garantías más efectivas, desapareciendo la burocratización y también la lentitud de los procesos; evitando errores en la que no se han individualizado los hechos o no se ha realizado ningún ejercicio de subsunción o no se ha sustentado en elementos probatorios mínimos,

resultando nula absolutamente, seguido de consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal al violarse el principio de imputación necesaria.

Summary

The objective of this work is to review the problem of the imputation necessary in the immediate process and the legal consequences in the criminal procedure practice in the new Peruvian procedural model, criticizing the lack of good criminal accusations by the Public Ministry that has assumed the prosecutory role of crime opening investigations with various accusations where there have even been accusations of facts with different legal qualifications where care has not been taken in describing the factual propositions and the criminal subtype or typical modality described in the criminal norm.

The present investigation tries to process information that is important and referred to the necessary imputation of the punishable act as a *conditio sine quantum* to enable the real exercise of the defense, therefore, it has to be defined and configured to materialize a suitable resistance. The defendant can only defend a defined imputation, only from this perspective, it is understood why the object of the process is defined by the imputation of the punishable act - punitive claim, and the object of the debate by the opposition.

Likewise, it is intended that the legal operator, before facts with any criminal connotation, make a legal qualification, having clearly delimited the facts, establish the degree of participation and intervention, circumstances of place and time, so that the pretensioner can optimally manage a investigation and the accused fully exercise his right of defense. Therefore, the necessary or specific imputation, is the duty of the burden that the Public Ministry has to impute to a natural person, a punishable act, affirming factual propositions linked to the realization of all elements of the criminal type. Thus, it has been achieved to date to offer a vision and the result of different, more efficient work, to face old problems, thus, also the inefficiency of an investigation, the most effective guarantees, disappearing the bureaucratization and also the slowness of the processes; avoiding errors in which the facts have not been identified or there has been no exercise of subsumption or has not been based on minimum evidence,

being absolutely null, followed by legal consequences in the criminal procedural practice when the necessary imputation principle is violated.

INTRODUCCIÓN

El cumplimiento del principio de imputación necesaria pasa por respetar lo más escrupulosamente posible los elementos estructurales del tipo penal. El Proceso Penal tiene que ver con un proceso de atribución, en el sentido de imputar al inculpado, la realización de una conducta típica y penalmente antijurídica, en cuanto a definir si el estado de desvalor y/o la puesta en peligro del bien jurídico de titularidad de la víctima-

, pertenece en realidad al ámbito de esfera de organización personal del imputado, sea como autor y/o partícipe; de modo que queden excluidas de antemano, aquellas consecuencias perjudiciales, obra del destino, de la causalidad, del azar u de otro factor concomitante y/o sobreviniente, que hayan podido generar dicho estado desvalor; ello en correspondencia con la estructura basilar de la moderna teoría de la imputación objetiva.

De ahí, que se puede decir con toda corrección, que la imputación jurídico-penal, cumple un papel trascendental en el procedimiento penal, no sólo en orden a cautelar las garantías procesales elementales, sino también de garantizar el respeto inescrupuloso del principio de legalidad material *nullum crimen nulla poena sine lege praevia*, de que el relato fáctico que sirve al persecutor público para construir su hipótesis de incriminación, se adecue plenamente a los alcances normativos del tipo penal en particular; de no ser así, se promueven persecuciones penales, que finalmente traerán consecuencias indeseables, para con los fines que debe desplegar la Justicia Penal en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.

Con lo dicho, queremos decir, que el principio de «imputación necesaria» no sólo importa una exigencia que recae sobre los órganos judiciales, sino también sobre el representante del Ministerio Público, máxime, si conforme el nuevo modelo procesal penal, el principio acusatorio, el cual se vincula directamente con el objeto de estudio, adquiere un mayor vigor aplicativo; lógicamente, que en este nivel, estamos aún, en un estadio preliminar, donde no se puede predicar certeza alguna sobre la materialidad

delictiva y la responsabilidad penal del imputado. No obstante, la exigencia es clara, donde la imputación aún provisoria, debe mostrar una definición clara y precisa, sobre los presupuestos de atribución delictiva.

Por tales motivos, a nuestro entender, el principio de «imputación necesaria», trasvasa un plano estrictamente procesal, en cuanto a los principios: acusatorio, de defensa, de contradicción, de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, para penetrar en el núcleo de sustantividad material del Derecho penal, en lo que respecta al principio de legalidad, del sub principio de tipicidad así como del principio de imputación individual; es por eso, que hemos postulado nuestra investigación en el Derecho penal práctico; el cual en el Capítulo I presentamos como punto de partida la problemática observada en por ello se plantea el problema, se formula los objetivos, la justificación y la viabilidad de la investigación. En el Capítulo II, denominado Marco Teórico, presentamos los antecedentes del estudio y los planteamientos teóricos propiamente dichos, estos fundamentos teóricos parte de un análisis normativo, las mismas que permiten formular las hipótesis, aquí también se identifican las variables e indicadores. En el Capítulo III encontraremos la Metodología, las técnicas e instrumentos a utilizarse, ello comprende el nivel y tipo los métodos de investigación, aquí también se identifican la población y muestra. El Capítulo IV, lo constituye los resultados que se presentan en cuadros y gráficos y finalmente en el Capítulo V, presentamos los resultados para finalizar con las conclusiones y recomendaciones junto con las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos.

La investigadora.

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. Descripción del problema.

Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en muchos departamentos la ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos penales por parte de los operadores del ministerio público se ha constituido en un problema por los que muchos investigados por delitos de flagrancia, han quedado impunes por haberse sobreseído en la etapa intermedia o perdido en el juicio oral, por no haber estructurado bien la imputación objetiva o necesaria con suficientes elementos fácticos que se vinculen con el hecho punible de cada una de las imputaciones atribuidas al presunto actor de la comisión de un delito.

La imputación necesaria o concreta y los medios para su protección en el nuevo sistema procesal penal del proceso inmediato por flagrancia delictiva es uno de los temas de mayor preocupación en la doctrina nacional; sin embargo, en muchas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema ha puesto de relieve su importancia en garantizar el derecho de defensa y deber de motivaciones de las resoluciones judiciales; así como, de las disposiciones y requerimientos fiscales. Es decir la persona humana es y debe ser el centro primordial de atención del proceso penal, por lo que no debe ser instrumentalizada como un engranaje de la maquinaria del proceso penal, lo exige el principio de imputación necesaria.

En la actualidad en el distrito judicial de San Martín Tocache, la ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos penales por parte de los fiscales penales se ha generado en un problema porque en un 25% los que muchos investigados han quedado impunes por haberse sobreseído en la etapa intermedia o perdido en el juicio oral, por no haber estructurado o elaborado su teoría del delito bien la imputación concreta con suficientes elementos fácticos que se vinculen con el hecho punible de cada una de las imputaciones, además de requerimientos. Pero este problema de no saber plantear una debida imputación en el requerimiento de incoación del proceso inmediato, no es desde

que se apertura el Nuevo Código Procesal Penal sino que se venía arrastrando desde el viejo modelo procesal. Los doctrinarios, magistrados y los que ejercen la abogacía se han dedicado abundantemente a desarrollar capacidades sobre litigación oral y estudiar la norma procesal, pero nos hemos olvidado de un tema esencial, saber construir adecuadamente un tipo penal para que el imputado sepa desde un inicio y tenga claro si su conducta es considerada como delito por el fiscal.

Este problema de las proposiciones fácticas y calificaciones jurídicas genéricas no bien estructuradas es muy recurrente en la zona judicial de Tocache - San Martín donde se ha presenciado incluso que algunos jueces lo dejan pasar, durante la investigación preparatoria o el saneamiento del proceso, como si ese no sería el problema del juez de investigación preparatoria, más grave aún de los abogados, que por desconocimiento o falta de estudio del caso de forma irresponsable dejan pasar este punto vulnerándose el derecho de defensa de su patrocinado y violando el principio de legalidad.

Por toda esta problemática observada, existen suficientes razones para realizar la presente investigación sobre la cual se formula el siguiente problema.

1.2. Formulación del problema

Problema general

¿En qué medida la imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016?

Problemas específicos.

- A. ¿Cómo la debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016?
- B. ¿De qué manera la acusación fiscal se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016?

- C. ¿En qué medida la legislación nacional aplicable por los operadores de justicia se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín - Tocache 2016?

1.3. Objetivo general

Determinar si la imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016.

1.4. Objetivos específicos

- A. Evaluar cómo la debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016.
- B. Evaluar de qué manera la acusación fiscal se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016.
- C. Analizar en qué medida la legislación nacional aplicable por los operadores Jurídicos se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016.

1.5. Justificación de la investigación

Hay la necesidad de sistematizar conocimientos teóricos sobre la imputación necesaria en el proceso inmediato y las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en el distrito judicial de San Martín - Tocache, ya que, el tema de la imputación necesaria es el punto importante para el ejercicio del derecho de defensa; sin una correcta descripción de los hechos y sus circunstancias tiempo, modo y lugar no es posible precisar que existen las condiciones necesarias para que la persona imputada pueda defenderse adecuadamente, con lo cual se advierte una vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales y los dictámenes fiscales.

Así mismo la investigación resulta trascendental ya que, la imputación

necesaria en el proceso inmediato y la práctica procesal penal a nivel nacional han generado la atención pública y el debate de esta problemática en los estudiantes, abogados, inculcados, fiscales, incluso jueces y mismos justiciables, todos vinculados en el desarrollo del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal para comprender el sentido y necesidad jurídica del juicio del cumplimiento de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, derecho de defensa, que deben gobernar el Estado Democrático Constitucional de Derecho y no lesionando el derecho de defensa de los justiciables, al no tener éstos la posibilidad de rebatir los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les atribuye, en función del artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política del Perú.” por el plazo precario del proceso inmediato por delito en flagrancia.

1.6. Limitaciones de la Investigación

Las limitaciones advertidas en la ejecución de la presente investigación fueron las siguientes: No se tiene acceso a bibliotecas en la ciudad de Tocache. A nivel local no existen investigaciones desarrollados en relación directa con el título de nuestra investigación. Dificultad para acceder a la biblioteca de la Universidad de Huánuco, por la distancia del lugar de investigación que es la ciudad de Tocache.

1.7. Viabilidad de la Investigación

La presente investigación científica es viable por cuanto la investigadora dispuso de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para realizar el estudio en el tiempo disponible o previsto de acuerdo al cronograma establecido en el proyecto aprobado; También se contó con asesores expertos en el tema y por trabajar en la misma ciudad de Tocache.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes de la investigación

Los antecedentes de investigación están constituidos por trabajos similares o relacionados con el tema objeto de estudio, que aportan información valiosa para definir y delimitar la investigación que se presenta a nivel internacional, nacional y local.

A nivel internacional

A continuación, se presenta los antecedentes encontrados que han tenido repercusión en relación al presente trabajo de investigación que se fue abordando:

A1. De Paz (2013), en su tesis *“La imputación objetiva en materia penal”*, desarrollado en Guatemala, concluye que:

- El Ministerio Público al realizar la imputación de un delito no se basa en criterios racionales para una adecuada imputación del hecho delictivo, ya que no toma en cuenta la sistematización de la estructura del delito en el periodo de investigación que éste realiza sobre el hecho delictivo.
- El agente fiscal del Ministerio Público en casos aislados no realiza la investigación del delito en forma objetiva y autónoma ya que no práctica diligencias pertinentes, útiles para determinar si existe un hecho delictivo e identificar al imputado, creando hipótesis y conjeturas erróneas.
- El debido proceso no se cumple de forma correcta cuando el agente fiscal del Ministerio Público viola los derechos individuales y garantías constitucionales del imputado al realizar una acusación basada en una investigación poco objetiva, inaplicandose así el sistema garantista en el cual se basa la normativa jurídica de Guatemala.

A Nivel Nacional

A1. Andía, (2013), en su investigación: *“Deficiencias en la Labor Fiscal y Judicial en las Distintas Etapas del Actual Proceso Penal”* concluye que:

1. Durante la investigación preparatoria se advirtió que el fiscal al momento de acusar no determina adecuadamente los hechos, pues no precisa de manera individual los que corresponden a cada uno de los acusados, tampoco señala cuáles son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que habría impedido el desarrollo de una adecuada investigación desde su inicio.
2. En la etapa intermedia se ha evidenciado que pese a no haber obtenido suficientes elementos de convicción que permitan acreditar la comisión del hecho delictivo y/o la vinculación del imputado con el mismo, o ambas a la vez, el fiscal optó por acusar y no por el sobreseimiento del caso.

A2. Carrasco, A. (2016) en su tesis “*La Implicancia del Proceso Inmediato por Flagrancia Delictiva Al Principio Acusatorio y al Derecho a ser Juzgado en un Plazo Razonable, Lima-Norte 2016*”, desarrollado en la ciudad de Lima concluye en lo siguiente:

- Efectivamente en el proceso inmediato por flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, asimismo se da cuenta que esta vulneración es consecuencia de la excesiva celeridad existente en este proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
- El plazo establecido de 24 a 48 horas desde la detención para la recaudación de medios probatorios que desvirtuaran la presunción de inocencia del acusado y sustentan la acusación fiscal en un proceso de flagrancia tiene implicancia negativa en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Asimismo, se debe cambiar el hecho de que el fiscal sea obligado a acusar una vez pasado la audiencia de proceso inmediato y darle la potestad que en caso de duda pueda pasar a proceso ordinario.

2.2. Bases teóricas

- **La imputación necesaria en el proceso inmediato.**

Cáceres (2008), sostiene que: “la imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite afirmar a negar en cada caso o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados, amplíen, excluyan o aminoran la significancia penal.”

Así mismo, Nolasco (2011), sostiene que “el principio de imputación necesaria no sólo debe cumplir con describir el hecho, la específica modalidad de conducta, o ante pluralidad de imputaciones o imputados, precisar cada uno de sus aportes, sino que debe necesariamente cumplir con establecer la distinción entre los autores que ostentan el dominio del hecho o infringen el deber institucional y los partícipes, cómplices o instigadores que lesionan el bien jurídico de modo accesorio.”

Maier (2000), se refiere al principio de la imputación necesaria en los siguientes términos: “La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal. (...) La Imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que por el contrario debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento que se supone real con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y la proporcione su materialidad concreta.”

Finalmente, Maier, señala que la imputación necesaria es el punto trascendente para el ejercicio del derecho de defensa; sin una correcta descripción de los hechos y sus circunstancias tiempo modo y lugar no es posible precisar que existen las condiciones necesarias para que la

persona imputada pueda defenderse adecuadamente, con lo cual se advierte una franca vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales y fiscales. El principio de la imputación concreta está muy vinculado con muchos otros principios procesales penales, de desarrollo constitucional como los que mencionamos. Una investigación donde el imputado no puede saber cuál es el hecho que se le imputa y en virtud de que pruebas elementos de convicción es completamente inconstitucional.

a) Derecho a la imputación necesaria

Según Reátegui, (2011) la investigación preliminar, como parte integrante de la actividad persecutoria del delito liderada por el Ministerio Público, debe estar rodeada de determinados principios de carácter constitucional, y que su vigencia y su respeto pueden viabilizarse con el hábeas corpus. El principio de imputación necesaria protege derechos constitucionales que han de estar presentes en la formalización de la denuncia. Estos derechos consisten en la interdicción a la arbitrariedad, legalidad y debido proceso. La imputación tiene que concretarse en las etapas iniciales del proceso penal, por lo que bien puede denominarse, dice el autor, como “derecho a obtener una resolución con imputación concreta”. La imputación necesaria exige que la etapa inicial sea donde se realice con mayor intensidad este principio, pues sólo de esa manera se asegura una mejor protección de los derechos de defensa y la tutela de los demás derechos.

Además, Reátegui (2011), señala que este principio hace su aparición dentro del proceso regulado por el Código de Procedimientos Penales, a partir de la promulgación de la Ley N° 28117, que modificara el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. En esta ley se amplía el texto, por cuanto se señalan de manera expresa que la instrucción sólo se abrirá, si se considera que aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que en la anterior ley no se hacía mención,

además de precisar que es necesario se haga la diferencia entre autor y partícipe. El derecho a la imputación necesaria está conformado por una trilogía de derechos, que se deberán de tener en cuenta si es que se pretende respetar el estado de derecho constitucional: motivación de las resoluciones, legalidad de la conducta, y defensa del imputado. Es decir, el derecho de imputación necesaria se desprende de otro derecho, que viene a ser el derecho a la tutela procesal efectiva, de ahí que esta trilogía esté referida a derechos que se respetan en su mayoría a la luz de un proceso penal, y no tanto de derecho material. Se entiende entonces la vinculación de este principio con la materia de este trabajo, puesto que, primero, la exigencia de este principio está concentrada en las etapas iniciales del proceso, buscando la concurrencia de los más elementales derechos para sostener una adecuada imputación fáctico-jurídica; y segundo, la vulneración del principio de la imputación necesaria, conllevaría a la vulneración del debido proceso, procediendo entonces un hábeas corpus de tipo conexo.

b) Fundamentos del Principio de Imputación Necesaria

Reátegui (2010), señala que la constitución política del Perú consagra un conjunto de principios que rigen el proceso penal, uno ellos los cuales es el principio de imputación necesaria. El principio de imputación necesaria, o también llamado principio de Imputación Concreta (término acuñado por Alberto Binder) no se encuentra taxativamente señalado en nuestra constitución, sino que tiene que ser ubicado a través de la interpretación de los artículos 2, inc. 24, párrafo d y 139, inciso 146, pues *la imputación necesaria es una manifestación del principio de legalidad y del principio de defensa procesal*.

En aplicación del Art. 2, in. 24, párrafo D, de la carta de 1993, por el Principio De Legalidad, una persona sólo puede ser procesada por un hecho típico, es decir, que la denuncia penal debe tener como objeto una conducta en la que se verifiquen todos los elementos exigidos en la ley penal para la configuración del delito. En aplicación

del Artículo 139, inciso 14, de la carta del 1993, por el principio de defensa procesal, para que una persona pueda ser procesada la denuncia penal debe contener con precisión la conducta delictiva atribuida a fin de que el imputado pueda defenderse. Solo con una descripción clara, precisa, detallada y ordenada, puede respetarse el derecho de defensa.

Si queremos ahondar más en el tema podemos encontrar amparo en el Título Preliminar del NCPP, en el artículo XI, que en definitiva es una norma de interpretación y desarrollo constitucional, que prevé lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”

El término “detalladamente” hace mención a que la imputación que se formule debe ser precisa, clara, concreta y suficiente, no genérica o abundante y vaga.

Como vimos, el principio de imputación concreta no tiene fundamento sólo desde el punto legal y constitucional, sino inclusive en el plano de las recomendaciones internacionales; puesto que podemos encontrar un sustento supraconstitucional del principio de imputación necesaria; así, podemos citar por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14, numeral 3, letra a) señala lo siguiente:

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.”

A. La teoría del delito

Según Roxin (2005), la teoría del delito es un sistema de categorización por niveles, conformado por el estudio de los

presupuestos jurídico-penales de carácter general que deben concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es calificable de delito. Esta teoría, creación de la doctrina (pero basada en ciertos preceptos legales), no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular, sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los delitos.

Es un instrumento conceptual útil para realizar una aplicación racional de la ley penal al caso concreto, se le atribuye una doble función: por un lado, mediar entre la ley penal y el caso concreto y por otro lado, mediar entre la ley penal y los hechos materiales que son objeto de juicio. Se trata de una teoría de la aplicación de la ley penal, ya que primero debemos verificar que una conducta humana (acción) se adecua a la descripción realizada por el tipo (tipicidad), luego que la misma no esté autorizada ni que goce de un permiso por el ordenamiento jurídico (antijuricidad). Y por último, comprobar que el autor posee las condiciones personales para imputarle dicha conducta (culpabilidad). Esta teoría no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los delitos. La teoría del delito tiene como principal objetivo precisar el concepto de delito, ya que este es su objeto de estudio.

a. La teoría del caso

Según Vogler (2005), sostiene que la perspectiva fáctica - legal de cada sujeto procesal, respecto a lo que ha acontecido y a los medios de prueba existentes, es la óptica que sobre el caso ofrecemos al juzgador, y que pretendemos que éste haga suya, a fin de que llegue a nuestras mismas conclusiones. En buena cuenta es nuestra posición respecto a lo que sucedió, es decir es la plantilla de la defensa de cada parte.

La teoría del caso se la va construyendo desde que tenemos conocimiento de la noticia criminal y se va formando a través de las etapas del proceso previas al juicio. Se empieza

con hipótesis de trabajo que se van decantando en el transcurso de las 2 primeras etapas, y debe transformarse en teoría antes del juicio.

a) Elementos

- Elemento Fáctico: Información de los hechos referidos a la noticia criminal y selección de los datos relevantes.
- Elemento Normativo: proceso de subsunción de los hechos acontecidos en la o las normas pertinentes. (Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o punibilidad).
- Elemento Probatorio: que acrediten la relación fáctica - normativa precedente.

b) Características

La teoría del caso en principio solo debe ser una, sin embargo, se han previsto excepciones como: la acusación complementaria. Art. 374.2, retiro de acusación. Art. 387.4 y alegación de pedidos que favorezcan al procesado. Art. 390.2.

- Autosuficiencia: Debe ser una versión completa que explique cada arista de lo sucedido y que tenga correlato con el respectivo medio probatorio. Es decir, debe ser convincente, lógico y sustentado. Que por sí misma explique todo, no deje cabos sueltos.
- Verosimilitud: El contenido debe ser razonable, creíble, sustentado en máximas de experiencia o conocimientos cotidianos, o científicos.
- Idea fuerza: Debe haber vinculación con una idea fuerza o valor social o bien jurídico penal.

B. El Principio acusatorio y el proceso penal

Revilla (2009), señala que el modelo procesal penal denominado acusatorio se fundamenta en principios trascendentes como el de legalidad y de oficialidad. Según los expertos esta variante procesal

rige en nuestra legislación a partir de la promulgación del Decreto Legislativo N° 638. Esta disposición legal reconoce al Ministerio Público la condición de titular excluyente del ejercicio público de la acción penal. Además, le impone la carga de la prueba y le otorga, para ejercitar ambos aspectos, total independencia funcional y exclusiva sujeción a la ley.

De allí que sea correcto entender que en nuestro sistema procesal el Ministerio Público ostenta el monopolio de la persecución penal. El nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004, también ha recogido dicho modelo como su rasgo característico principal. En ese ámbito, pues, la vigencia del principio acusatorio exige que la acusación sea ejercitada y mantenida durante todo el proceso por un órgano distinto del juez: el fiscal representante del Ministerio Público se convierte en el centro neurálgico del proceso, pues dirige y coordina toda actividad procesal que no esté directamente ligada al hecho de dictar sentencia o al cumplimiento formal y material de los derechos y garantías fundamentales que puedan verse afectados en dicho contexto.

a. El principio *iura novit curia*.

Este principio, tantas veces invocado en la formación y praxis del derecho, se remonta al derecho romano e implica la presunción lógica del conocimiento del derecho por parte del juez. Es decir, que este por su formación y cultura profesional y funcional tiene sólidos conocimientos del derecho aplicable al caso. En tal sentido, no es necesario que las partes en un litigio prueben ante la autoridad judicial lo que dicen las normas. Ahora bien, la operación procesal y decisional en la que más claramente se pone de manifiesto el sentido de dicho principio es la subsunción. Esto es, la interrelación que debe hacer el órgano jurisdiccional entre los hechos del caso y el supuesto de hecho normativo. En términos más concretos, la subsunción de hechos en el precepto de una norma es lo que conocemos como su calificación jurídica.

C. La flagrancia y el proceso inmediato

Para Arraya (2016), los últimos acontecimientos judiciales que han generado la atención pública y el debate ciudadano se relacionan con las sentencias dictadas casi de inmediato por flagrancia. Términos como ‘proceso inmediato’ y ‘flagrancia’ se repiten constantemente por los diversos actores de la sociedad. ¿Cuánto conocemos realmente sobre estos conceptos?.

El proceso inmediato es un proceso especial previsto en el Nuevo Código Procesal Penal (CPP) y procede en tres supuestos, cuando:

- a) la persona es sorprendida en flagrante delito,
- b) la persona confiesa el delito y
- c) hay suficiencia probatoria.

En estos casos, el Decreto Legislativo 1194 obliga al fiscal a que solo en los casos de delito flagrante debe promover el proceso inmediato, dejando de lado el proceso común.

La flagrancia es un estado evidente de la comisión de un delito y habilita a la policía a detener a una persona; el fiscal solo cuenta con 24 horas para ponerlo a disposición del juez. El artículo 259 del CPP admite cuatro estados de flagrancia:

- a) cuando el sujeto está cometiendo el delito (flagrancia propiamente dicha),
- b) cuando es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito (cuasi flagrancia),
- c) cuando se le encuentra dentro de las 24 horas de producido el delito con los objetos o instrumentos del mismo (presunción legal) y
- d) por sindicación del testigo o víctima o por video vigilancia (presunción por sindicación).

El Decreto Legislativo 1194 cambia el verbo rector ‘podrá’ que facultaba al fiscal, por ‘deberá’. Se afirma que ello afecta la discrecionalidad del fiscal. Ciertamente es discutible, pues en la práctica quien califica la flagrancia es el fiscal. Si dicha autoridad considera que los hechos no configuran flagrancia, no está obligado a requerir el proceso inmediato. Si existiendo flagrancia, el fiscal no cuenta con los elementos de prueba materiales

inmediatos para sustentar su pedido ante el juez (por demora en las pesquisas, por ejemplo), deberá seguir con el proceso común.

Deben señalarse tres aspectos puntuales:

Primero, afirmar que el incremento de las condenas puede generar el colapso del sistema carcelario escapa a la función fiscal y judicial, no es real y evidencia una falta de coherencia y previsión en la política criminal del Estado al elaborar y promulgar este decreto legislativo. Los fiscales solo aplican la ley. Se pueden imponer penas de corta duración o de servicios comunitarios.

Segundo, cuando se elaboren leyes, debe contarse con la opinión de los entes especializados en justicia para su mejor redacción y viabilidad, lo que no ocurrió en este caso.

Tercero, debieron considerarse los recursos humanos y logísticos que sustenten la aplicación de esta nueva ley. No se ha previsto la necesidad de mayor número de fiscales, personal auxiliar, capacitación y logística. No se puede afirmar que la implementación de estas medidas “se financian con cargo al presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.

La flagrancia y el proceso inmediato generan una respuesta positiva al clamor social de justicia y aporta a la seguridad ciudadana. En este sentido, el Ministerio Público está comprometido y atento a los casos de flagrancia. Justicia rápida, y, sobre todo segura, es justicia.

a Características Principales de la Flagrancia.

San Martín (1999), expresa que “la flagrancia delictiva es el eje o condición previa que legitima la detención preliminar policial”. Desprendiéndose de la doctrina y la normatividad existente ciertas características que le son propias, pudiéndose mencionar las siguientes:

- 1) Inmediatez temporal**, que consiste en que la persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes. El elemento central lo constituye el tiempo en que se comete el delito. Lo inmediato es en el momento mismo, lo que se está haciendo o se acaba de hacer.

- 2) **Inmediatez personal**, es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.
- 3) **Necesidad urgente**, se da ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se da ante la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. La característica propia de la inmediatez exige la intervención policial en el delito.

Es preciso resaltar que, para que se configure la flagrancia en un delito, el agente debe haber superado las fases internas del *iter criminis* y debe encontrándose como mínimo en la fase ejecutiva o externa del delito o a punto de consumir el hecho ilícito.

Sin embargo, Ore, (1999) señala que no sólo debemos conocer las características de la flagrancia, sino reconocer sus tipos, para lo cual señala que: “En la doctrina procesal suele distinguirse hasta tres clases de flagrancia las mismas que varían según el alejamiento temporal que existe entre la conducta delictuosa y la aprehensión de su autor.

- b. **Flagrancia estricta:** Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del hecho punible.
 - **Cuasiflagrancia:** Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido.

- **Presunción de flagrancia:** En este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumir el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho”. Estos distintos tipos de flagrancia a la fecha han sido establecidos por la Ley N° 29569, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, sin embargo debe tenerse en cuenta la pluriculturalidad de nuestro país, debido a que la casuística nos demuestra que no en todo el Perú, se entiende a la flagrancia del mismo modo.

D. Decreto legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia.

Artículo 1°.- Objeto de la norma La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957.

Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
 - b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o
 - c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.

Numeral 4. La Audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a

un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:

- a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
- b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
- c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

a Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116. Fundamento jurídico Respecto a la Legitimidad de la incoación Obligatoriedad del Proceso Inmediato Impuesta al Ministerio Publico.

El apartado uno del artículo 446 del Nuevo Código Procesal Penal, establece la obligatoriedad impuesta al Ministerio Publico de solicitar el proceso inmediato (pudiendo requerirse el inicio, cuando específicamente corresponde hasta el día 29 de formalizada la investigación preparatoria, motivándose tal decisión), bajo amenaza de responsabilidad administrativa, se entiende, por acto de omisión funcional.

Tal exigencia u obligatoriedad de incoación, vulnera el principio constitucional de autonomía del Ministerio Publico que el artículo 158 de la Constitución Política del Perú le otorga como titular en el ejercicio de la acción penal en tanto que el inciso 1, del artículo 61 del Código Procesal Penal atribuye al fiscal, independencia de criterio como estrategia en el proceso, por lo que le corresponde elegir la vía más idónea para la consecución de los fines del procesamiento; pudiendo por tanto requerir el inicio del encausamiento inmediato cuando razonablemente considere se encuentren cumplidos los fines de la investigación, con respecto de los derechos de todas las partes intervinientes, teniendo presente los derechos de defensa del

presunto agente y de la parte agraviada como lo indica el artículo IX, del propio título preliminar del NCPP.

Es inconstitucional obligar al Ministerio Público que bajo amenaza de sanción disciplinaria requiera el inicio del proceso inmediato, al oponerse tal coacción a la autonomía fiscal, expresada en su independencia de criterio, más aun cuando la decisión de no incoación es su atribución discrecional y no arbitraria, compatible con sus deberes y responsabilidades de dirección de la investigación.

b. El procedimiento especial como mecanismo de simplificación procesal.

Brousset (2009), indica que la inserción de estos mecanismos simplificatorios, en nuestro ordenamiento procesal penal, surgen como respuesta a las prácticas procesales burocrático-rituales, inherentes a la tradición procesal europeo continental, que aunadas a la expansión del derecho penal sustantivo; generan la saturación de la carga procesal, altos niveles de población carcelaria en condición de procesados sin condena e ineficacia que se traduce en amplios márgenes de impunidad.

Al respecto, los procedimientos especiales son aquellos mecanismos procesales simplificatorios instituidos para la resolución de situaciones especiales o específicas con la finalidad de abreviar el proceso penal común, teniendo como objeto los principios de celeridad y economía procesal.

Para Neyra (2010), los procesos especiales son aquellos procesos que se particularizan en razón de la materia a la que están referidas, dichos procesos están previstos para circunstancias o delitos específicos o en razón de las personas o en los que se discute una concreta pretensión punitiva. Los procesos especiales, conservan los principios básicos que informan al proceso penal, pues son parte de este, siendo distintos al proceso común. Una de las razones básicas por las que se ha implantado esta regulación de los procesos especiales en el código procesal penal obedece a la simplificación procesal como método de descarga de casos; podemos ilustrar ello

de la siguiente manera, así como un autobús tiene una capacidad determinada para transportar pasajeros y no puede soportar más carga que la que implica el transporte de dichos pasajeros, así también, la capacidad del proceso común no puede abarcar el conocimiento de todos los procesos.

Sánchez (2011), respecto a la justificación de la creación de los procedimientos especiales, hace referencia al principio de igualdad, que establece que se debe tratar de forma igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales, para que la justicia no solo sea formal, sino que sea efectivamente en términos materiales, señalando que la justificación de la creación de procesos especiales se debe a diferencias en los supuestos de aplicación, que hacen que aplicar el proceso ordinario a supuestos distintos o especiales a los comunes contravenga el principio de igualdad, por ejemplo, casos que, por la voluntad de las partes, o por la simplicidad de la prueba, se pueden terminar brevemente el transcurrir del proceso penal, no deben sufrir las partes todo el vía crucis del proceso ordinario. Por ello, cada proceso especial está diseñado para una situación especial (pero siempre teniendo como base el proceso ordinario). El criterio de simplificación que asume el CPP 2004 por razones de política criminal, se concreta, de un lado, en circunstancias puntuales derivadas de la evidencia probatoria, que genera el procedimiento inmediato y de otro lado en el consentimiento de las partes que pueden dar lugar los procedimientos de terminación anticipada y por colaboración eficaz. Como vemos, esto se condice con el CPP 2004 ya que los procesos por razón de la función pública y el de seguridad, se han dado por razón de la persona a quien se procesa; el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal es por razón del delito y la acción privada, el proceso de terminación anticipada y proceso por colaboración eficaz, se dan por motivos de celeridad procesal y la facultad negocial de las partes. El proceso inmediato se da por la suficiencia probatoria.

De lo anteriormente expuesto, colegimos que la justificación de la creación de los procedimientos especiales está destinada en

implementarlos para situaciones o delitos específicos, que, de acuerdo a su simplicidad o especialidad, sería innecesario aplicar todo el procedimiento ordinario, teniendo como fundamento el criterio de simplificación procesal que asume el CPP 2004 por razones de política criminal.

En este orden de ideas, los procedimientos especiales deben estar regulados y dirigidos para situaciones especiales y específicas con la finalidad de evitar etapas procesales innecesarias logrando una resolución más célere, eficaz y especializada.

c. Consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal.

Morillas (1991), sostiene que tradicionalmente cuando se abordan temas como las Penas y las Medidas de seguridad se hace desde una perspectiva netamente penológica (respecto de las penas y de las bases de la punibilidad) a la vez que de criterios asegurativos de los infractores penales. Nunca, o muy poco, desde la perspectiva netamente del análisis de las consecuencias jurídicas del delito.

Como ya quedó demostrado el esquema de protección penal (sistema penal) siempre se estructura en base a una triada de lógica normativa: represión, prevención y reparación. De estas tres las netamente penales, o las que surgen de la relación estado-delincuente son las dos primeras, siendo la primera por excelencia de índole penal. En este sentido cabe hacer un análisis previo respecto de las penas como consecuencias jurídicas del delito.

a) Las medidas de seguridad

Para Rodríguez (1995), las medidas de seguridad son otras de las consecuencias jurídicas del delito en orden punitivo. Si bien es cierto no son medidas de orden represivo sino sólo asegurativo. Su incorporación dentro de las consecuencias jurídicas del delito como niveles formales de control social, están dadas por su carácter post-delictual: en nuestro sistema penal. Las razones de la existencia de las medidas de seguridad se fundamentan en órdenes de política criminal y penal, a la vez

que en fundamentos de prevención especial. Dentro del ámbito de la dogmática penal, dichas razones se sustentan en las siguientes:

1. **No existencia de Culpabilidad.** La Culpabilidad, entendida como elemento dinámico en la teoría del delito: es el fundamento de la pena, como tal supone un análisis de la capacidad de culpabilidad (reprochabilidad en sentido normativo) dentro de los cuales estará el de la imputabilidad (también semi-imputabilidad) como un elemento de obligatoria observancia a fin de que ella se concrete y de este modo la pena a imponerse al autor de la acción típica y antijurídica se legitimará. Si en este caso quien delinque no es un imputable absoluto entonces no podrá ser objeto de pena. Sin embargo. La tesis de la defensa social (aunque atenuada) determinará que es necesario resguardar la seguridad e integridad social de quienes, aunque no pudiendo percatarse de la ilicitud de sus actos, la vulneran. Es necesario entonces, pensar en formas alternativas de control que no necesiten cumplimentar una estructura culpable en la configuración del delito.
2. **Por insuficiencia de la pena como instrumento de Política Penal (control social formal).** Conforme a la observación anterior, si sólo existiera la pena como instrumento de política penal conducente al control social formal. Entonces mal podría tutelarse los intereses de la sociedad si se dejara libre a quien ha realizado un hecho típico y antijurídico, aunque no culpable. De esta manera se tiene que los presupuestos para la imposición de las medidas de seguridad son: a) Peligrosidad del sujeto (peligrosidad criminal y no meramente social). Toda peligrosidad criminal es una peligrosidad social pero no al revés. Es por ello que la peligrosidad, como presupuesto de la imposición de las medidas de seguridad siempre debe partir de la existencia de una peligrosidad criminal, es decir, de realización de un hecho

típico y antijurídico (aunque no culpable). b) Peligrosidad post delictual (crítica a la medida; de seguridad pre-delictuales). La peligrosidad no debe ser pre-delictual, es decir la peligrosidad del sujeto no se debe sustentar en criterios de probabilidad positiva (aún exacerbada) en la comisión de un hecho calificado como delito. Por las meras condiciones personales del agente (vago, alcohólico. loco. cte.) sino más bien de la verificación objetiva de un evento criminal en la que el sujeto a asegurar sea autor o partícipe.

E. El proceso penal.

El proceso es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo y que mantienen vinculación, de modo que están concatenados, sea por el fin perseguido, sea por la causa que los genera. El proceso penal permite aplicar la Ley penal abstracta a un caso concreto a través de una sentencia (Calderón y Águila, 2011, P. 9).

Según Florián (1927), “Es el conjunto de actos mediante m los cuales se provee por órganos fijados y preestablecidos en la ley, y previa observancia de determinadas formas a la aplicación de la ley penal en los casos singulares concretos”.

a. Características del proceso penal.

- Los actos del proceso son realizados por los órganos jurisdiccionales preestablecidos en la Ley.
- La aplicación de la norma del derecho penal objetivo, es al caso concreto.
- Tiene un carácter instrumental.
- Tiene la naturaleza de un proceso de cognición.
- El proceso penal genera derechos y obligaciones entre los sujetos procesales.
- La indisponibilidad del proceso penal.
- El objeto es investigar el acto cometido y la restitución de la cosa de la que se ha privado o la reparación del daño causado con el delito.

- Para que se dé el proceso penal, es necesario que exista un hecho humano que se encuadre en un tipo penal y, además que puede ser atribuido a una persona física en el grado que sea, como autor, coautor, instigador o cómplice. (Reyna, 2006).

b. Teoría del derecho de defensa.

Según Gimeno (1985) refiere que el respeto por el derecho a ser escuchado antes de ser denunciado formalmente constituye la forma primera y más elemental del derecho a la defensa. Es decir, antes de ser escuchado por un juez, el derecho a la defensa exige ser oído por el fiscal o policía; no para rendir una declaración formal, sino la oportunidad que la parte requirente oiga por primera vez la posición del denunciado. Esto solo y exclusivamente con la finalidad de ser oído, y no de brindar declaración alguna.

Para Gimeno (1985), los actos de defensa en todo su despliegue, desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del proceso, constituyen materia del *hábeas corpus*, no como resultado de una concepción liberal-individualista (propia del Estado del S. XIX) que concibe la defensa como derecho potestativo del imputado, sino como producto de la defensa pública, que responde a la concepción del Estado Social sobre el proceso penal, garantizando la defensa efectiva del procesado.

Aunque lo que se recoja dentro del procedimiento investigatorio carezca de carácter vinculante, y que posteriormente, los medios de investigación sean verificados a través de los medios de prueba, es de vital importancia prestar declaración dentro de la etapa preliminar, pues, se podría evitar el inicio de un proceso penal con el consiguiente menoscabo que se produce en la esfera personal tanto material como espiritual del imputado. Si bien es cierto no hay obligación de asistir a rendir declaración en esta etapa, existe la necesidad del imputado de asistir e intentar aclarar los hechos, para evitar posteriores molestias. Además, es necesario que las citaciones a las que se es convocado como investigado, contengan la especificación de los cargos que se le imputan, de esa manera poder preparar la defensa

correspondiente. Caso contrario, estamos ante un caso de indefensión, cuando se convoque al imputado a presentarse al Ministerio Público, sin que se expliquen las razones de la citación.

c. Teoría garantista en el derecho penal.

Ferrajoli (1999), dice que el garantismo nació en el derecho como una respuesta frente a la gran divergencia existente entre lo que establecen las constituciones y demás normas superiores de los ordenamientos jurídicos. Que consagran derechos y garantías ideales para los ciudadanos. Y lo que acontece en la realidad, en donde tales derechos y garantías muchas veces no se cumplen. " Si leemos los derechos y garantías de los ciudadanos establecidos en nuestra Constitución y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos a los que la Argentina se adhirió y que poseen rango constitucional a partir de 1994, veremos que, por ejemplo, el habitante de nuestro país no puede ser detenido sin una orden de un juez; que tiene un ámbito de intimidad en el cual el Estado no se puede inmiscuir; que su domicilio y correspondencia son inviolables; que frente a la acusación por un delito o falta tiene derecho a un juicio en el cual se lo trate como inocente- y a ejercer su defensa; que en caso de que sea condenado a prisión. Debe ser alojado en una cárcel sana y limpia; que se le asegura igualdad ante la ley, que no será discriminado.

d. El hecho delictivo en flagrancia.

Rojas (2013), sostiene que, en Derecho Penal, el acto de flagrancia se inicia cuando una persona es aprehendida en el momento de cometer un hecho delictivo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito, ya sea por denuncia, notica criminis o por alerta policial". Los aspectos siguientes se describen con el fin de reforzar las definiciones conceptuales sobre lo que es un acto en flagrancia. "Existen cuatro posibilidades de hallarnos en presencia de delitos en flagrancias; en primer lugar; cuando un sujeto es sorprendido realizando un hecho

delictivo; por ejemplo, cuando cualquier persona, sea particular o autoridad, sorprenda a un sujeto apoderándose ilegítimamente de bienes muebles dentro de un establecimiento comercial, al cual había logrado ingresar mediante el empleo de la fuerza en las cosas.

En segundo lugar, se podría hablar de flagrancia cuando un sujeto es sorprendido inmediatamente después de haber cometido un hecho delictivo. La tercera posibilidad, de estar en presencia de hechos en flagrancia, es cuando el sujeto es perseguido por el ofendido, policía o particulares, inmediatamente después de haber cometido un hecho delictivo. Por último, existirá flagrancia cuando un sujeto tenga en su poder objetos relacionados con el delito, como por ejemplo los bienes sustraídos o los instrumentos utilizados en el delito, como podría ser un arma de fuego, un puñal, entre otros; o bien, cuando presente rastros, como por ejemplo restos de pólvora, o de sangre, que pueden haber quedado, en un homicidio con arma blanca, o con un arma de fuego producto de un disparo de contacto”.

e. La nulidad de la resolución como efecto de la violación al principio de imputación necesaria.

Cáceres (2010), sostiene que la nulidad de los actos procesales es definido en la doctrina como: “La sanción por la cual se priva de sus efectos a un acto o conjunto de actos procedimentales incorporados al proceso, por carecer de regularidad en alguno de sus elementos estructurales en orden al patrón legal”. En esa medida “La nulidad es (...) un mecanismo del derecho operativo ante la frustración de los derechos o garantías resguardadas a través de la composición estructural de los actos procedimentales”. Teniendo en consideración dicha premisa, toda declaración de nulidad es producto de la una violación de la garantía constitucional, entre otros, el derecho a la imputación necesaria. A diferencia de las nulidades relativas (reparables), las nulidades absolutas son aquellas que implican la violación de normas constitucionales y que no pueden ser subsanadas. Entre los derechos vulnerados se encuentra el de defensa

(art. 139 inc. 14 Constitución), íntimamente relacionado con el principio de imputación necesaria.

En su función de director de la investigación en el proceso penal, el Ministerio Público emite decisiones con efecto para terceros y que suponen la interpretación de normas jurídicas (como la de dar inicio a una investigación preliminar, de formalizar una investigación o acusar, entre otros). Asimismo, el Juez, al resolver una controversia, deberá tomar una posición adecuadamente motivada y acompañada con los elementos de convicción “que la justifiquen”. En caso no se cumpla con aquel deber de respetar el principio de imputación necesaria, se incurrirá en un defecto capaz.

a) Defectos de imputación y su clasificación

Los defectos de imputación, implican imprecisiones, omisiones o atribuciones incompletas, tomando como referente siempre la imputación de la teoría jurídica. Los defectos de imputación pueden ser formales o sustanciales.

1. Los defectos de forma, pueden estar referidos a omisiones o imprecisiones ajenas a la imputación de alguno de los elementos objetivos del delito y siempre que no causen indefensión.
2. Los defectos sustanciales, se refieren a la falta de imputación respecto de alguno de los elementos objetivos del tipo y omisiones o imprecisiones, que causan indefensión.

Entiéndase como indefensión, la ausencia de posibilidad real en el caso concreto, de poder ejercer alguno de los derechos del imputado o la limitación de alguno de sus derechos procesales. No debe entenderse la indefensión, como un concepto en abstracto, sin relación con el caso.

En cualquier caso, los defectos deben ser superados, para posibilitar precisamente, el derecho de defensa. La respuesta no puede ser sin más, el archivo del caso. Si la reacción frente a la redacción fiscal, fuera únicamente la extinción de la acción

penal, o la desaparición del hecho escrito. Entonces, por una cuestión de coherencia, tendríamos que posibilitar al fiscal, la redacción de un hecho más preciso, sobre un mismo suceso histórico, tesis que resulta inaceptable.

b) Rol de los operadores jurídicos en el nuevo código procesal penal.

Para Cubas (2006:62), la reforma que trae consigo una serie de modificaciones en los roles que cumplen los operadores del nuevo proceso penal, esto es, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la defensoría de oficio y la defensa privada al amparo de enfrentarse a una nueva manera de pensar y por tanto de desarrollar el proceso penal.

Es importante destacar que para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal se ha logrado que las instituciones antes mencionadas logren un trabajo conjunto; esto es, se ha realizado un trabajo de coordinación que nunca antes se había logrado en tal magnitud, un trabajo de coordinación que ha servido para delimitar las facultades que cada institución tiene a fin de lograr una correcta administración de justicia, sin dilaciones indebidas sino que por el contrario favorezcan un proceso con las garantías procesales adecuadas para tutelar los derechos de los justiciables. Pero el aspecto más importante es el referido al hecho de la separación de funciones en tanto que entienden que su papel es el de juzgar, no el de calificar el delito o acusar. La policía realiza las investigaciones bajo la dirección técnica del fiscal, el fiscal es quien acusa y el juez es quien juzga. He aquí la esencia del modelo adversarial. Los jueces ahora son terceros pasivos, esto es, que tienen bien diferenciada su función de juzgar; su función no es acusar o defender al procesado sino juzgar. La idea es que el juez – sea unipersonal o colegiado – llegue a la audiencia, limpio, sin conocer del proceso para evitar de esta manera la parcialización y desde luego, que no asuma posturas que corresponda a alguna de las

partes. Otro cambio importante en el rol de la función jurisdiccional es el referente al método de trabajo de los jueces en tanto que se ha dejado de privilegiar la confesión como “regina probatio” para dar prioridad a la prueba pericial en tanto que es muestra del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto constituye claramente una gran ventaja en la búsqueda de la verdad para mejor sentenciar.

2.3. Definiciones conceptuales

- **La imputación necesaria en el proceso inmediato:** Debemos de entender que como la "atribución, más o menos fundada, a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como consecuencia".
- **Imputación:** En el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado nace en el momento en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que ello deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecerá la imputación. Pero desde que una persona es objeto de ella, tiene derecho a todas las garantías de la defensa en juicio.
- **El proceso inmediato en casos de flagrancia:** El proceso inmediato es un procedimiento especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el proceso penal. La finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular directamente la acusación y que esta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia.
- **Incoación:** Es el Inicio de una actuación legal e incoación de un expediente. Además, es comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, pleito, expediente o alguna otra actuación oficial.
- **Principio acusatorio:** Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión práctica del

acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Sin acusación previa y válida no hay juicio oral.

- **Principio del derecho a la prueba:** Trata de un derecho complejo, en vista de que su contenido se encuentra integrado por los siguientes derechos: i) el derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de la prueba; ii) el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; iii) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; iv) el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, v) el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento.
- **Proceso:** Es el medio adecuado del Estado para resolver conflictos a través del Derecho procesal que establece el orden de los actos (procedimiento) para la correcta prestación de la actividad jurisdiccional.
- **Inmediato:** Indica que algo sucede o se realiza enseguida o justo después de otra cosa, sin pasar tiempo entre ellas.
- **Inmediatez temporal:** Consiste en que la persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes. El elemento central lo constituye el tiempo en que se comete el delito. Lo inmediato es en el momento mismo, lo que se está haciendo o se acaba de hacer.
- **Inmediatez personal:** Es cuando la persona se encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.

2.4 Hipótesis

Hipótesis General.

La imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona de manera positiva alta con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en la zona judicial de Tocache - San Martín, 2016.

Hipótesis específicas:

- A** La debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona significativamente con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016.
- B** La acusación fiscal se relaciona positivamente con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016.
- C** La legislación nacional aplicable por los operadores Jurídicos se relaciona de manera positiva con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016.

2.5. Variables

2.5.1. Variable dependiente: La imputación necesaria

2.5.2. Variable Independiente: Práctica procesal penal

2.6. Operacionalización de variables (Dimensiones e Indicadores)

Variable	Dimensiones	Indicadores
V.I La imputación necesaria	Incoación del proceso inmediato Acusación fiscal Legislación nacional	<ul style="list-style-type: none">- La inmediatez temporal e inmediatez personal- Características del proceso inmediato- Los hechos, de una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado- La calificación jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal.- Los elementos de convicción o de prueba, que establece o acredita la hipótesis incriminatoria- Sustento de la teoría del caso del fiscal- Valoración estrategia de defensa técnica del imputado- Nuevo código procesal penal- Decreto Legislativo 1194- Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116
V.d Consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal	Garantía de derechos del imputado	<ul style="list-style-type: none">- Derecho de defensa- Derecho al debido proceso- El principio de legalidad.

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación que corresponde a la presente tesis, es de tipo básica, porque se busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar donde se presenta el fenómeno que quiere estudiarse.

3.1.1. Enfoque

La presente investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, porque se usará recolección de datos para probar las hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para conocer patrones de comportamiento.

3.1.2. Alcance Nivel

La presente investigación se ubica en el nivel jurídico social, descriptivo – explicativo.

Según su objeto científico, a nivel Jurídico social es el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad (Álvarez, 2003).

Descriptiva, porque se busca especificar las características y perfiles de personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis de una o más variables en una muestra de la población.

Explicativa, porque se enfoca en explicar las causas por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Sampieri, 2010, pág. 140).

3.1.3. Diseño

El diseño que se utilizó es el diseño No experimental transversal descriptivo correlacional como un modelo de implementación y ejecución del presente proyecto de investigación se visualiza en siguiente esquema:

$$M \longrightarrow X \text{ --- } r \longrightarrow Y \longleftarrow O$$

Leyenda:

M = Abogados litigantes en delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017.

X= La imputación necesaria en el proceso inmediato

Y= Las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal

r = relación entre variables

O= Observación de las variables

3.2. Población

Para la aplicación de la encuesta se definió como población a personas profesionales en derecho que se desempeñan como abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el distrito judicial de San Martín – Tocache, 2016.

Tabla Nº 01
Tabla de la población de estudio

Unidad de estudio	Cantidad	%
Abogado litigante en delitos de flagrancia con proceso inmediato que ejercen patrocinio en el año 2017 en la zona judicial de Tocache del Distrito Judicial de San Martín.	48	100%

Fuente: Archivo Modular JF- DJSM2016-2017.

3.3. Muestra

Nuestra muestra estuvo representada por 20 abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017, seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional a criterio de la investigadora, y por tener un acercamiento con los Abogados que se acercaban al despacho fiscal.

Tabla Nº 02
Tabla de la muestra de estudio

Sujetos de la muestra	AÑO 2016	AÑO 2017	TOTAL
Abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017	10 Sujetos de estudio	10 Sujetos de estudio	20 Unidades de estudio

Fuente: Elaboración propia

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación

3.4.1. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó y se validó en función del problema planteado el siguiente instrumento:

- A. El Cuestionario.** Instrumento seleccionado para encuestar a 20 abogados litigantes en los delitos de flagrancia seguidos en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache 2016, cuyo cuestionario de 13 ítems cumple con los criterios científicos a efectos de recoger minuciosamente los datos más al detalle por cada encuestado según la muestra tomada.

3.4.2 Técnicas e instrumentos para el procesamiento de datos

Para el procesamiento se procedió a través de la tabulación para luego sistematizarlo en tablas desde la cual se procedió a interpretarlos.

3.4.3 Técnicas e instrumentos para la comunicación de resultados

Finalmente, para comunicar los resultados obtenidos de las tablas se procedió a expresarlos a través de tablas y gráficos en forma de barras.

CAPITULO IV RESULTADOS

4.1 Procesamiento de datos

4.1.1. Resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de cuestionario a los expertos según la variable 1: La imputación necesaria.

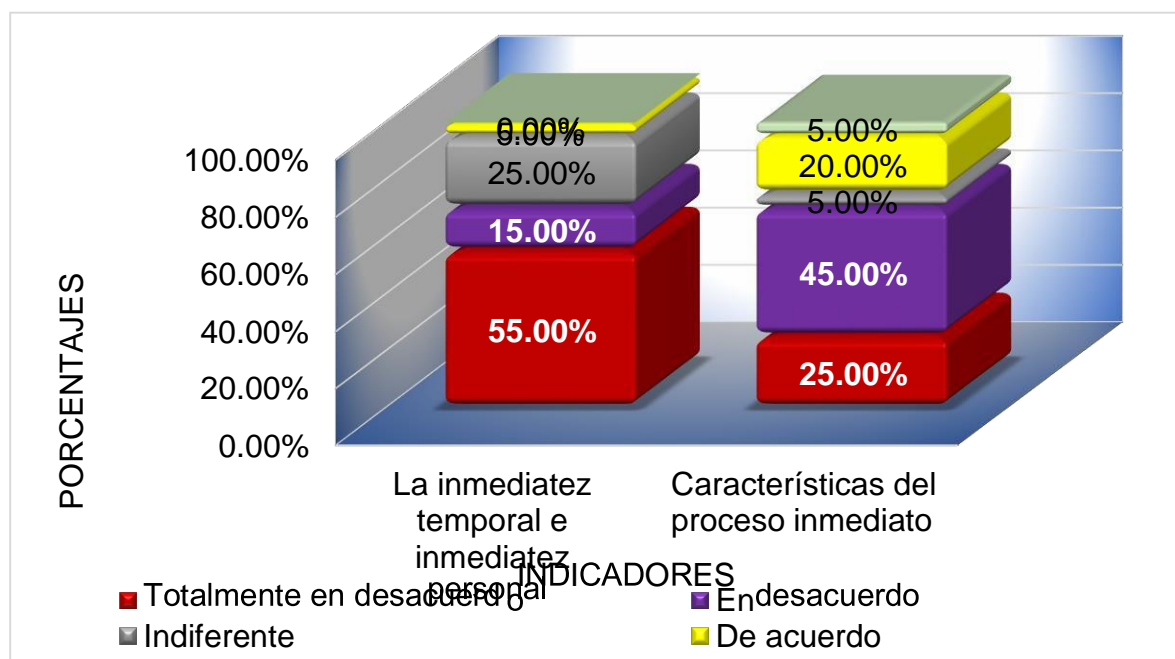
Tabla N° 03

A. Resultado de la dimensión “Incoación del proceso inmediato” por indicador

Escala numérica	DIMENSIÓN	Incoación del proceso inmediato			
	INDICADOR	La inmediatez temporal e inmediatez personal		Características del proceso inmediato	
	Nivel o Categoría	fi	hi%	fi	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	11	55.00	5	25.00
2	En desacuerdo	3	15.00	9	45.00
3	Indiferente	5	25.00	1	5.00
4	De acuerdo	1	5.00	4	20.00
5	Muy de acuerdo	0	0.00	1	5.00
Total		20	100	20	100

Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Grafico N° 003



Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Análisis e Interpretación.

La tabla N° 03 muestra los resultados por indicador de la aplicación de la encuesta a los 20 Abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017, según la dimensión “Incoación del proceso inmediato”; en él se observa que 14 encuestados están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el accionar de los fiscales al respetar la inmediatez temporal e inmediatez personal en la incoación del proceso inmediato, representando estos al 70% del total, mientras que solo un encuestado que representa al 5% del total se muestra de acuerdo. En lo concerniente a si los fiscales cumplen con priorizar las características del proceso inmediato, también 14 encuestados que hacen el 70% del total, se muestran en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta aseveración, en tanto que solo un encuestado que representa al 5% del total, se muestra muy de acuerdo con este accionar; en términos generales, esto quiere decir que los encuestados reconocen que los fiscales no cumplen con respetar la inmediatez temporal e inmediatez personal en la incoación del proceso inmediato.

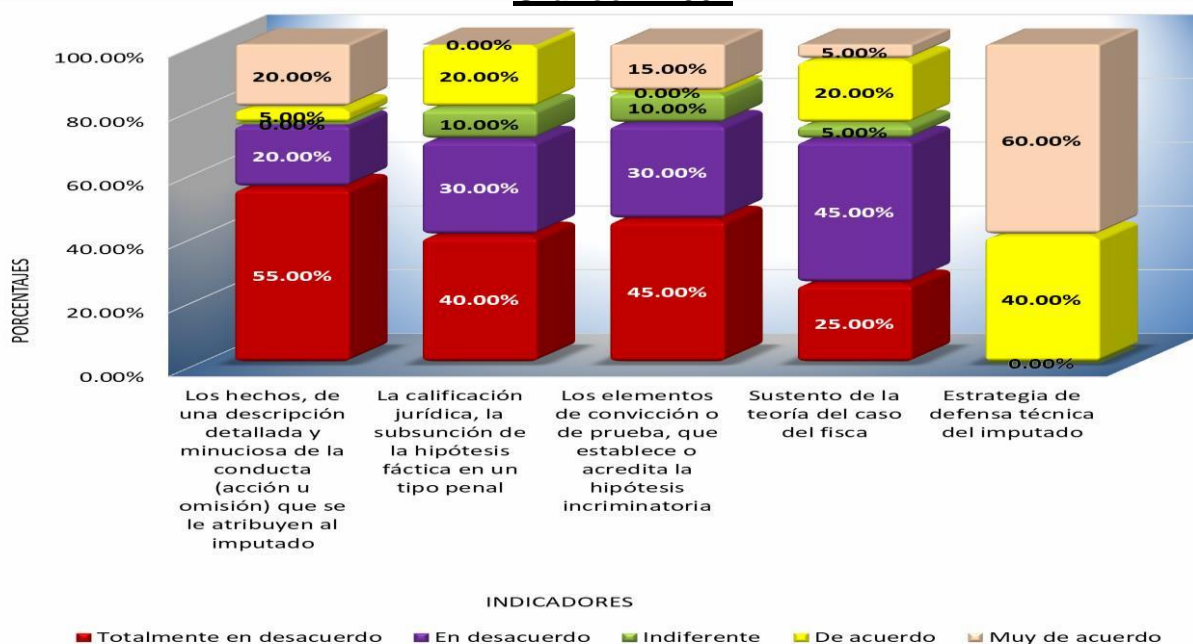
Tabla N° 04

B. Resultado de la dimensión “Acusación fiscal” por indicador

Escala numérica	DIMENSIÓN	Acusación fiscal									
	INDICADOR	Los hechos, de una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado		La calificación jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal		Los elementos de convicción o de prueba, que establece o acredita la hipótesis incriminatoria		Sustento de la teoría del caso del fisca		Estrategia de defensa técnica del imputado	
		fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	11	55.00	8	40.00	9	45.00	5	25.00	0	0.00
2	En desacuerdo	4	20.00	6	30.00	6	30.00	9	45.00	0	0.00
3	Indiferente	0	0.00	2	10.00	2	10.00	1	5.00	0	0.00
4	De acuerdo	1	5.00	4	20.00	0	0.00	4	20.00	8	40.00
5	Muy de acuerdo	4	20.00	0	0.00	3	15.00	1	5.00	12	60.00
Total		20	100	20	100	20	100	20	100	20	100

Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Gráfico N° 002



Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Análisis e Interpretación.

La tabla N° 04 muestra los resultados por indicador de la aplicación de la encuesta a los 20 Abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017, según la dimensión “Acusación fiscal” en él se observa que 15 encuestados están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que los fiscales, argumentan los hechos con una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado en el proceso inmediato, representando estos al 75% del total, mientras que solo 4 encuestados que representa al 20% del total manifiestan estar muy de acuerdo. En cuanto a si los fiscales realizan una adecuada calificación jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en el tipo penal que acusa, 14 encuestados que representan al 70% del total, manifiestan estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo; en tanto que ningún encuestado manifiesta estar muy de acuerdo. En lo concerniente a si los elementos de convicción o de prueba recabados por el fiscal son suficientes para acreditar la hipótesis inculpativa en el proceso inmediato, 15 encuestados que representan al 75% del total expresan estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo; sin embargo, solo 3 encuestados que representan al 15% están muy de acuerdo. Con respecto a si el sustento de la teoría del caso del fiscal es eficiente y eficaz para construir una imputación necesaria en el proceso inmediato, 14 encuestados que representan al 70% del total hace notar su disconformidad ubicándose en las categorías de desacuerdo o de muy desacuerdo, en tanto que solo 1 encuestado expresa estar muy de acuerdo. En lo que respecta a si la estrategia de la defensa técnica del imputado es eficiente y eficaz para debatir la imputación formulada por el Fiscal en el proceso inmediato, 8 encuestados manifiestan estar de acuerdo y 12 muy de acuerdo, representando en conjunto al 100% de los encuestados. Estos resultados evidencian que el accionar de los fiscales no representa garantía ante un proceso inmediato, por el contrario, no hace, más que sembrar dudas sobre el profesionalismo de los operadores de justicia.

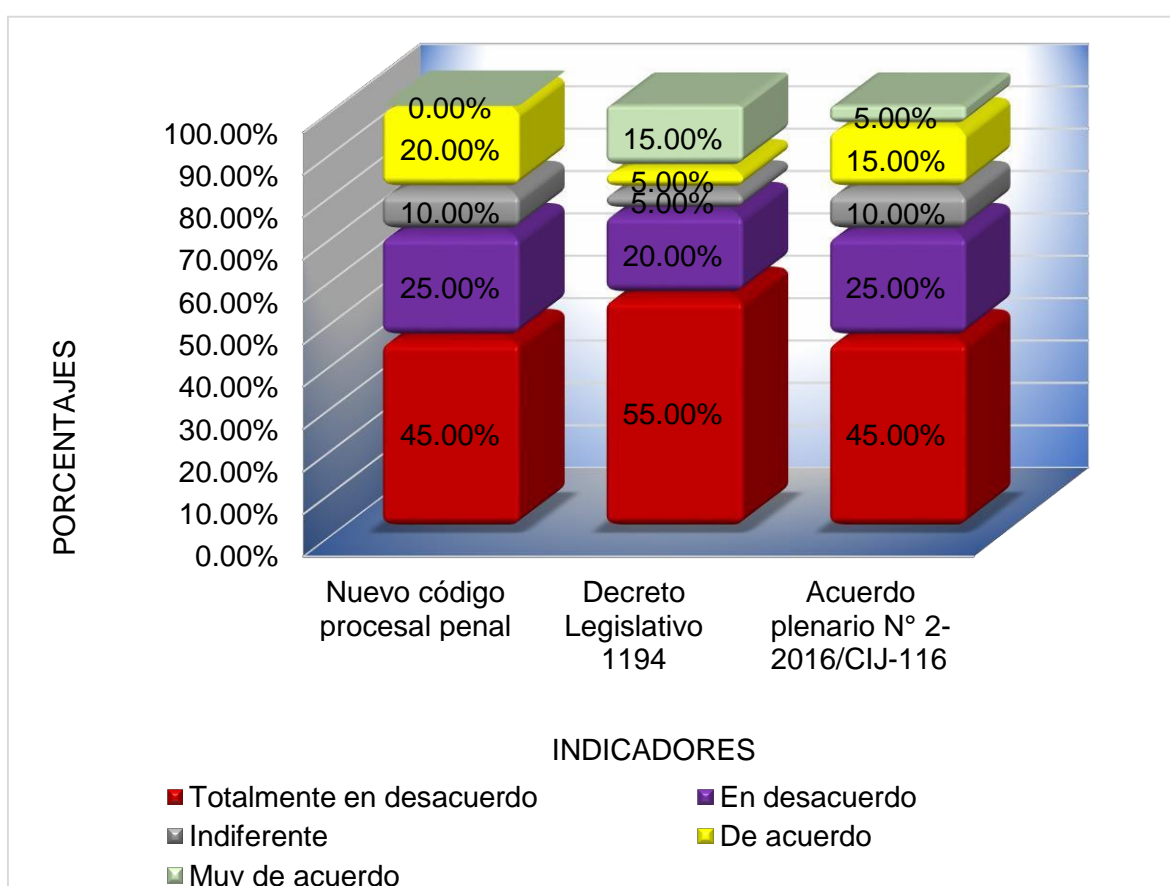
Tabla N° 05

C. Resultado de la dimensión “Legislación nacional” por indicador

Escala numérica	DIMENSIÓN	Legislación nacional					
	INDICADOR	Nuevo código procesal penal		Decreto Legislativo 1194		Acuerdo plenario N° 2-2016/CIJ-116	
	Nivel o Categoría	fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	9	45.00	11	55.00	9	45.00
2	En desacuerdo	5	25.00	4	20.00	5	25.00
3	Indiferente	2	10.00	1	5.00	2	10.00
4	De acuerdo	4	20.00	1	5.00	3	15.00
5	Muy de acuerdo	0	0.00	3	15.00	1	5.00
Total		20	100	20	100	20	100

Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Grafico N° 003



Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Análisis e Interpretación.

La tabla N° 05 muestra los resultados por indicador de la aplicación de la encuesta a los 20 Abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017, según la dimensión “Legislación nacional”; en él se observa, que en el primer indicador 14 encuestados están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo en que el Nuevo código procesal penal es un instrumento legal suficiente que orienta los criterios jurídicos de la imputación necesaria en el proceso inmediato, representando estos al 70% del total; en tanto que no existe cantidad representativa que estén muy de acuerdo. En cuanto al segundo indicador, la tendencia se mantiene, dado que 15 encuestados que hacen el 75% del total están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el actual procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato, mientras que solo 3 encuestados manifiestan estar muy de acuerdo. Con respecto al tercer indicador, 14 encuestados que representan al 70% del total están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que el Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116 es un instrumento legal que oriente los criterios de la imputación necesaria en el proceso inmediato, mientras que solo 1 encuestado que representa al 5% del total, manifiesta estar muy de acuerdo con el mencionado acuerdo plenario. Tal como se aprecia en el gráfico N° 003, para los encuestados, la normativa vigente y sus procedimientos no son sinónimo de garantía ante la imputación necesaria en un proceso inmediato.

4.1.2. Resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de cuestionario a los expertos según la variable 2: Consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal.

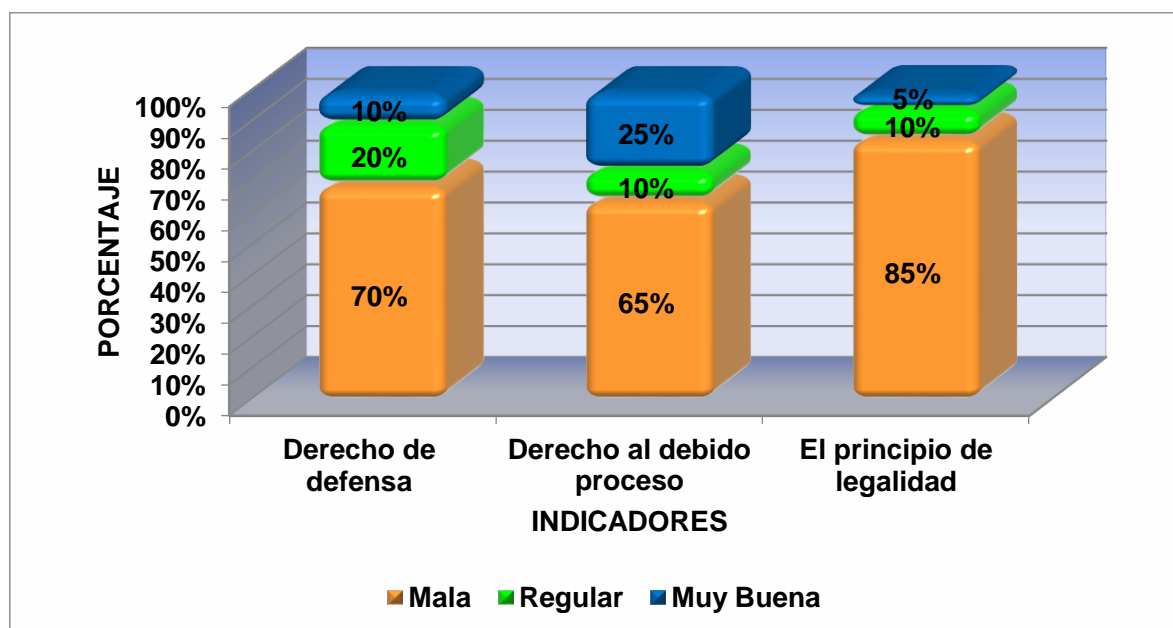
Tabla N° 06

Resultado de la dimensión “Garantía de derechos del imputado” por indicador

Escala numérica	DIMENSIÓN	Garantía de derechos del imputado					
	INDICADOR	Derecho de defensa		Derecho al debido proceso		El principio de legalidad	
	Nivel o Categoría	fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%
1	Mala	14	70.00	13	65.00	17	85.00
2	Regular	4	20.00	2	10.00	2	10.00
3	Muy Buena	2	10.00	5	25.00	1	5.00
Total		20	100	20	100	20	100

Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Gráfico N° 004



Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Análisis e Interpretación.

La tabla N° 06 muestra los resultados por indicador de la aplicación de la encuesta a los 20 Abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martín 2017, según la dimensión “Garantía de derechos del imputado”; en él se observa, que, existen diferencias mínimas en los resultados de cada indicador, pues como se observa, 14 encuestados

califican de mala el respeto del Derecho de defensa como garantía constitucional en el proceso inmediato, representando al 70% del total; 15 encuestados que representan al 75% del total califican de mala el respeto del Derecho al debido proceso como garantía constitucional en el proceso inmediato y 19 encuestados califican de mala el respeto del principio de legalidad como garantía constitucional en el proceso inmediato; estos resultados, indican la desconfianza de los abogado litigantes ante los actores de impartir justicia en cuanto a la garantía de derechos del imputado en los procesos inmediatos.

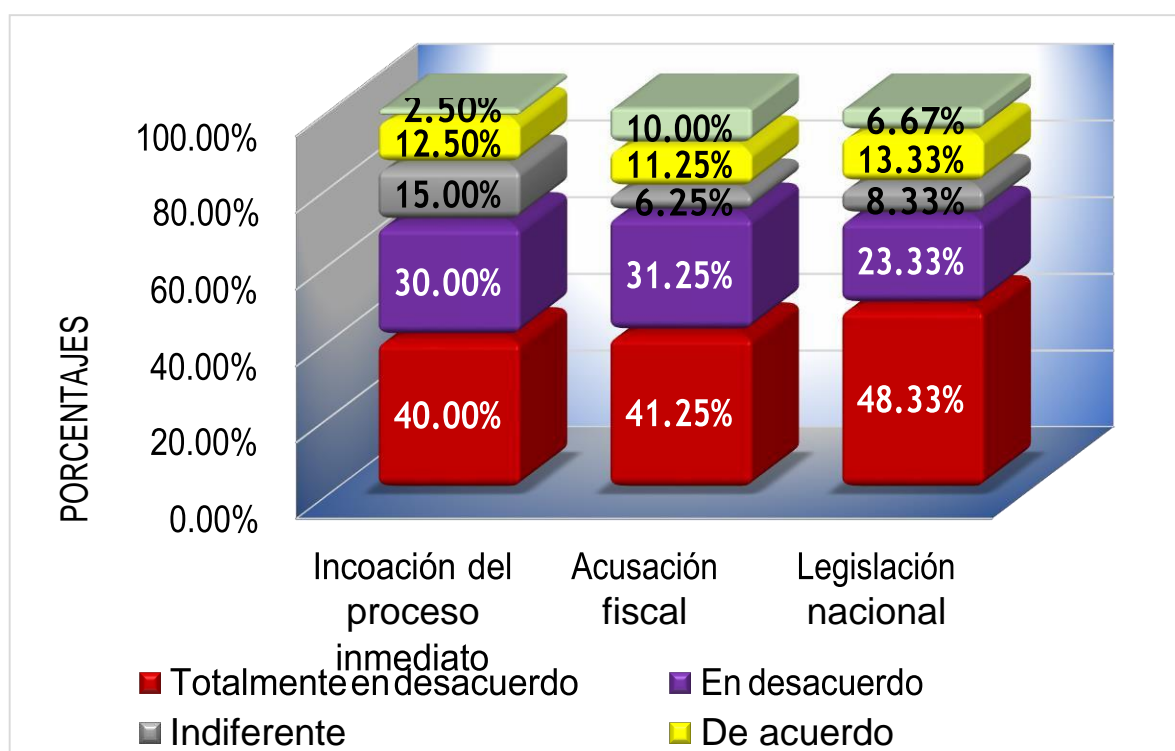
Tabla N° 07

4.1.3. Resultados de la variable independiente: La imputación necesaria

Escala numérica	Nivel o Categoría	DIMENSIONES					
		Incoación del proceso inmediato		Acusación fiscal		Legislación nacional	
1	Totalmente en desacuerdo	8.00	40.00	8.25	41.25	9.67	48.33
2	En desacuerdo	6.00	30.00	6.25	31.25	4.67	23.33
3	Indiferente	3.00	15.00	1.25	6.25	1.67	8.33
4	De acuerdo	2.50	12.50	2.25	11.25	2.67	13.33
5	Muy de acuerdo	0.50	2.50	2.00	10.00	1.33	6.67
Total		20	100	20	100	20	100

Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Grafico N° 005



Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Análisis e Interpretación.

Conforme a los resultados obtenidos según el análisis descriptivo de cada dimensión, la tabla N° 07 resume estos resultados para la variable independiente. Tal como se muestra en el gráfico N° 006, existe evidencia de que los encuestados son veraces en manifestar que no sienten confianza ni en la actuación de los fiscales ni de los actores de impartir justicia los cuales no se ajustan a la normativa vigente en el estado de derecho en la imputación necesaria en el proceso inmediato.

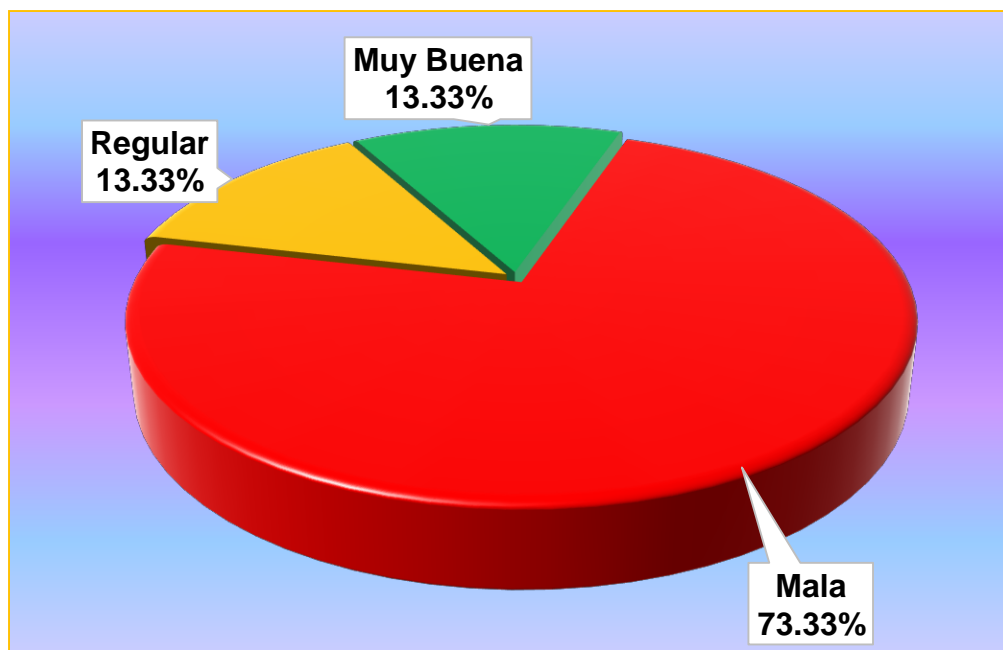
Tabla N° 08

4.1.4. Resultados de la variable dependiente: Consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal

DIMENSIÓN	Garantía de derechos del imputado		
Escala numérica	Nivel o Categoría	Promedio	hi%
1	Mala	14.67	73.33
2	Regular	2.67	13.33
3	Muy Buena	2.67	13.33
Total		20	100

Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

GRAFICO N° 006



Fuente: Ficha de cuestionario. Anexo 02
Elaboración: La tesista. Diciembre 2017

Análisis e Interpretación.

En cuanto a la variable dependiente, se puede observar que los encuestados afirman mayoritariamente, sentirse insatisfechos con el trabajo fiscal que garantice los derechos del imputado.

C. Interpretación general

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento, demuestran que en lo concerniente a la variable independiente los encuestados se muestran disconformes con el procedimiento fiscal así como con la normativa vigente que les garantice un respeto hacia los derechos del imputado, pues como de acuerdo al gráfico N° 005 más del 70% de los encuestados ubican sus opiniones en las categorías de “Totalmente en desacuerdo” o “En desacuerdo”; así mismo, el grafico N° 006 presenta que mayoritariamente los encuestados expresan que la práctica procesal penal como dimensión es mala en la jurisdicción del distrito judicial de Tocache 2016.

4.1.5. Contrastación de las hipótesis

A. Contrastación de hipótesis general:

1. **Nivel de significancia:**

Alfa = 5%

2. **Estadístico de prueba:**

Coeficiente de correlación Rho de Spearman, debido a que la relación es normal.

3. **Valor del coeficiente de correlación:**

La Rho de Spearman oscila entre 0 y 1

Entre 0,00 a 0,19 es muy baja la correlación.

Entre 0,20 a 0,39 es baja la correlación.

Entre 0,40 a 0,59 es moderada la correlación.

Entre 0,60 a 0,79 es alta la correlación.

Entre 0,80 a 1,00 es muy alta la correlación.

Empleamos el software estadístico SPSS

TABLA N° 09

Prueba de Correlaciones				
			La imputación necesaria en el proceso inmediato	Consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal
Rho de Spearman	La imputación necesaria en el proceso inmediato	Coeficiente de correlación	1,000	0,847**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	20	20
	Consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal	Coeficiente de correlación	0,847**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	20	20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).				

Rho = 0,847

4. Valor de P o significancia

P = 0,000

5. Conclusión:

Como el valor de P es inferior a 0,05, se rechaza la H₀; por lo tanto existe evidencia de correlación positiva significativa entre las variables, además como el valor de Rho esta entre 0,80 y 1,00 se concluye que la correlación entre las variables es muy alta; es decir, “La imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona de manera positiva alta con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016”.

B. Contrastación de hipótesis específicas

TABLA N° 010

Contrastación de la hipótesis Incoación del proceso inmediato y garantía de derechos del imputado.

Prueba de Correlaciones				
			Garantía de derechos del imputado	Incoación del proceso inmediato
Rho de Spearman	Garantía de derechos del imputado	Coeficiente de correlación	1,000	0,847**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	20	20
	Incoación del proceso inmediato	Coeficiente de correlación	0,847**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	20	20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).				

A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en la tabla N° 008 se obtiene:

Rho = 0,847

P = 0,000

Conclusión:

Tal como lo muestra la tabla N° 010, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, asume el valor de 0,847, dicho valor se ubica dentro de una correlación positiva alta de acuerdo a la calificación para la Rho, y como el P valor es inferior a 0,05 existe evidencia de correlación alta; ante esto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, “La debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona de manera positiva con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016”.

TABLA N° 011

Contrastación de la hipótesis acusación fiscal y garantía de derechos del imputado.

Prueba de Correlaciones				
			Garantía de derechos del imputado	Acusación fiscal
Rho de Spearman	Garantía de derechos del imputado	Coeficiente de correlación	1,000	0,983**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	20	20
	Acusación fiscal	Coeficiente de correlación	0,983**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	20	20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).				

A partir de los resultados obtenidos mediante el software informático SPSS en la tabla N° 009 se obtiene:

Rho = 0,983

P = 0,000

Conclusión: Se observa en la tabla N° 011 que el coeficiente de correlación Rho de Spearman adquiere el valor de 0,983 y el P valor de 0,000 es inferior a 0,05, esto indica que existe evidencia de correlación alta entre las variables; evidentemente, de acuerdo a la categorización del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el valor se ubica dentro de una correlación positiva muy alta, ante esto, existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; es decir, “La acusación fiscal se relaciona positivamente con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016”.

TABLA N° 012

Contrastación de la hipótesis legislación nacional y garantía de derechos del imputado.

Prueba de Correlaciones				
			Garantía de derechos del imputado	Legislación nacional
Rho de Spearman	Garantía de derechos del imputado	Coeficiente de correlación	1,000	0,876**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	20	20
	Legislación nacional	Coeficiente de correlación	0,876**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	20	20
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).				

A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en la tabla N° 002 se obtiene:

Rho = 0,876

P = 0,000

Conclusión: Se observa en la tabla N° 012 que el coeficiente de correlación Rho de Spearman asume el valor de 0,876 y el P valor de 0,000 es menor a 0,05, evidencian que existe alta correlación entre las variables; en concordancia a la categorización del coeficiente de correlación Rho de Sperman, el valor se ubica dentro de una correlación positiva muy alta, por lo tanto, existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula; es decir, “La legislación nacional aplicable por los operadores Jurídicos se relaciona de manera positiva alta con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016”.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Presentación de la Contrastación de los Resultados

Al terminar de realizar la presente tesis, los resultados de la hipótesis general en la prueba de correlación Rho de Sperman obtiene el valor de 0,847 al 95% de confiabilidad se concluye que la correlación entre las variables es muy alta. Se demuestra que en la zona judicial de Tocache - San Martin, la imputación necesaria en el proceso inmediato resulta ser una garantía dentro del proceso penal por parte de los señores fiscales toda vez que en la práctica de la incoación del proceso inmediato, acusación fiscal, se tiene en cuenta el cumplimiento de los principios de legalidad y el respeto del derecho defensa desde las primeras diligencias que es la toma de la declaración del imputado en cada una de estas etapas del proceso penal conociendo su importancia durante el juicio oral que es el objeto del debate. No guardando relación nuestro resultado con la investigación realizada por De Paz (2013), quien concluye que el Ministerio Público al realizar la imputación de un delito no se basa en criterios racionales para una adecuada imputación del hecho delictivo, ya que no toma en cuenta la sistematización de la estructura del delito en el periodo de investigación que éste realiza sobre el hecho delictivo; realizando una mala aplicación de los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad al investigar únicamente circunstancias en contra del imputado. En la hipótesis específica incoación del proceso inmediato y garantía de derechos del imputado, asume el valor de 0,847 y se ubica en una correlación positiva alta de acuerdo a la calificación de la tabla de Rho de Sperman, se demuestra que los fiscales realizan una imputación formulada con énfasis sobre el estado de flagrancia y la concurrencia de los requisitos de inmediatez temporal y personal, respetando el debido proceso, el derecho de defensa, que le asiste al imputado y que se complementa con la eficiente estrategia de la defensa técnica para debatir la imputación formulada por el Fiscal en el proceso inmediato en delitos de flagrancia seguidos en la zona judicial de Tocache - San Martin. Sin embargo nuestros resultados no guardan relación con la investigación de Andía (2013), al concluir que durante la investigación preparatoria se advirtió que el fiscal al momento de acusar no determina adecuadamente los hechos, pues no precisa de manera individual los que corresponden a cada uno de los acusados, tampoco señala cuáles son las

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que habría impedido el desarrollo de una adecuada investigación desde su inicio. En la etapa intermedia se ha evidenciado que pese a no haber obtenido suficientes elementos de convicción que permitan acreditar la comisión del hecho delictivo y/o la vinculación del imputado con el mismo, o ambas a la vez, el fiscal optó por acusar y no por el sobreseimiento del caso. En la hipótesis acusación fiscal y garantía de derechos del imputado se adquiere un valor de 0,983 en la prueba Rho de Sperman quedando demostrado que se ubica dentro de una correlación positiva muy alta. Se comprueba que los Fiscales en los casos de flagrancia con proceso inmediato formulan la imputación necesaria fundamentando los hechos, con una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado; con una calificación jurídica en la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal, cumpliendo con los elementos de convicción o de prueba que requiere la teoría del caso sin caer en una seudocausa probable genérica, gaseosa o carente de fundamento probatorio y jurídico penal. Al respecto, nuestros resultados no guardan relación con los estudios de Saavedra & Flores (2015), al concluir en lo siguiente: Se ha verificado que un preocupante porcentaje (aproximadamente 25%) de los requerimientos de acusación fiscal, no cumplen con el estándar constitucional de debida y suficiente motivación de las resoluciones judiciales. Ello implica que los hechos no han sido descritos de la manera más circunstanciada posible: día, hora, lugar, modo, identificación individualizada de los bienes comprendidos en la investigación, descripción de lo incautado con indicación del lugar, modo de cómo fue encontrado, etc. e indicarse el tipo penal en el que se subsuma con indicación de la modalidad o agravante específica si hubiere. Tampoco se señala en tales requerimientos cuál ha sido el aporte de cada uno de ellos, de qué modo han intervenido en los sucesos delictivos, de manera concreta y precisa, cuál es su calidad: autor, coautor, instigador, cómplice primario o secundario; no se precisa cuál o cuáles son los indicios que vinculan a tales autores y/o partícipes con los hechos que se les imputa, de forma individualizada y clara. Asimismo, nuestros resultados no guardan semejanza con la investigación de Carrasco (2016), al concluir que en el proceso inmediato por flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, asimismo se da cuenta que esta vulneración es consecuencia de la excesiva celeridad existente

en este proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable para la recaudación de medios probatorios que desvirtuaran la presunción de inocencia del acusado y sustentan la acusación fiscal en un proceso de flagrancia. Finalmente, el resultado de la hipótesis legislación nacional y garantía de derechos del imputado, obtiene un valor que se ubica en 0,876 en la prueba Rho de Sperman, cuyo valor demuestra una correlación positiva muy alta. Se comprueba que el Nuevo código procesal penal, el Decreto Legislativo 1194 y el Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116 aun son instrumentos legales suficientes que orienten los criterios de la imputación necesaria en el proceso inmediato en concordancia con la jurisprudencia penal, procesal penal y constitucional, en relación al principio de imputación necesaria demostrando estar capacitados sobre ello, y tener eficacia en el rol encomendado a los fiscales de formular una debida imputación de los hechos delictivos en flagrancia; no existiendo semejanza de nuestro resultado con la investigación de Reyes (2004), quien señala que la regulación actual en torno al delito flagrante es insuficiente, y que existen además muchos problemas interpretativos, derivados de la poca atención prestada al tema por parte de los juristas nacionales. Las normas que regulan actualmente el delito flagrante debe ser objeto de una reforma legal, debido a que se encuentran superadas ante la realidad, no han evolucionado y esta situación puede ser el inicio para una serie de críticas al actual sistema procesal penal.

CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados obtenidos en la investigación y contrastándolos con los objetivos planteados, podemos concluir en lo siguiente:

- Con los resultados de la prueba de correlación Rho de Sperman de la hipótesis general con un valor de 0,847. Se demuestra que en la zona judicial de Tocache - San Martín, la imputación necesaria en el proceso inmediato resulta ser una garantía dentro del proceso penal por parte de los señores fiscales toda vez que en la práctica de la incoación del proceso inmediato, acusación fiscal, se tiene en cuenta el cumplimiento de los principios de legalidad y el respeto del derecho de defensa desde las primeras diligencias que es la toma de la declaración del imputado en cada una de estas etapas del proceso penal conociendo su importancia durante el juicio oral que es el objeto del debate.
- Al evaluar el resultado de la debida imputación en la incoación del proceso inmediato con la garantía de derechos del imputado se tiene un valor de 0,326 en la tabla de Rho de Sperman. Se concluye que los Abogados litigantes perciben que los fiscales realizan una imputación formulada con énfasis sobre el estado de flagrancia y la concurrencia de los requisitos de inmediatez temporal y personal, respetando el debido proceso, el derecho de defensa, que le asiste al imputado y que se complementa con la eficiente estrategia de la defensa técnica para debatir la imputación formulada por el Fiscal en el proceso inmediato en delitos de flagrancia seguidos en la zona judicial de Tocache - San Martín.
- Al evaluar los resultados de la hipótesis acusación fiscal y garantía de derechos del imputado al obtener el valor de 0,983 en la prueba Rho de Sperman, se comprueba que los Fiscales en los casos de flagrancia con proceso inmediato formulan la imputación necesaria fundamentando los hechos, con una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado; con una calificación jurídica en la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal, cumpliendo con los elementos de convicción o de prueba que requiere la teoría del caso sin caer en una seudocausa probable genérica, gaseosa o carente de fundamento probatorio y jurídico penal.
- Al analizar el resultado de la hipótesis legislación nacional y garantía de derechos del imputado, se tiene un valor de 0,876 en la prueba Rho de Sperman, se comprueba que el Nuevo código procesal penal, el Decreto Legislativo 1194 y el

Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116 aun son instrumentos legales suficientes que orienten los criterios de la imputación necesaria en el proceso inmediato en concordancia con la jurisprudencia penal, procesal penal y constitucional, en relación al principio de imputación necesaria demostrando estar capacitados sobre ello, y tener eficacia en el rol encomendado a los fiscales de formular una debida imputación de los hechos delictivos en flagrancia.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones de la investigación realizada se sugiere lo siguiente:

- A partir de los resultados se sugiere a las autoridades de la zona judicial de Tocache – Distrito judicial de San Martín y fiscal de Tocache, seguir capacitando a los operadores jurídicos, abogados litigantes, jueces, fiscales, sobre la construcción de una correcta imputación en los procesos inmediatos.
- A los fiscales de Tocache, se sugiere observar el cumplimiento del principio de la imputación necesaria desde las primeras diligencias tomadas al imputado y reconocer su importancia en el juicio oral.
- A los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de Tocache respetar los derechos o garantías que son vulnerados por el incumplimiento de la garantía de la imputación penal o necesaria en los procesos inmediatos.
- A los magistrados del Poder Judicial de San Martín, se sugiere tener mayor control de los procesos de investigación y acusación fiscal a fin de evitar los vicios y abusos en los procesos inmediatos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, G. (2003). *“Importancia de la Metodología de la Investigación Jurídica en la formación del abogado”*. La Semana Jurídica, año 3, N° 139: 14. Santiago de Chile.
- Andía, G.V. (2013). *“Deficiencias en la Labor Fiscal y Judicial en las Distintas Etapas del Actual Proceso Penal”* [Tesis de Maestría] Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Arraya, A. (2016). El nuevo Proceso Inmediato (Decreto 1194) Hacia un Modelo de Justicia como Servicio público de Calidad con rostro Humano. Revista Informativa de Actualidad Jurídica N° 1; marzo 2016; pgs. 8-10.
- Brousset, R.A. (2009). Legitimación de las Fórmulas Consensuadas Simplificadoras del Procesamiento Penal. pp 82-83. Recuperado de: <http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/fdb88b80459574a6965ed67db27bf086/05.+Jueces++Ricardo+Alberto+Brousset+Salas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fdb88b80459574a6965ed67db27bf086>.
- CÁCERES JULCA, Roberto. (2010). Las nulidades procesales. Lima, p. 39.
- Cáceres, R. (2008). *“Habeas corpus contra el auto apertorio de instrucción”*. Grijley, Tomo 10, p. 137, Lima.
- Calderón, S.A y Águila G. (2011). El AEIOU del derecho. Modulo penal. Lima-Perú. Editorial San Marcos E.I.R.L.
- Carrasco, A. (2016). *“La Implicancia del Proceso Inmediato por Flagrancia Delictiva Al Principio Acusatorio y al Derecho a ser Juzgado en un Plazo Razonable, Lima-Norte 2016”* [Tesis de Grado] Universidad de Huánuco.
- Cubas, V. (2009). *“El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación”*. Lima: Palestra Editores.
- Cubas, V. (2006). El proceso penal: Teoría y Jurisprudencia Constitucional, Perú, Editorial Palestra.
- De Paz, S.A. (2013). *“La imputación objetiva en materia penal”* [Tesis] Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Escriche; (1957). *Enciclopedia Jurídica Omeba*, Tomo VI, Editorial Bibliográfica.Buenos Aires.Pág. 298.
- Ferrajoli, (1999). El derecho como sistema de garantías". En Teoría del garantismo penal - La Trotta. Madrid.

- Florian G. (1927). *Principi di Diritto Processuale Penale*, Turin.
- Gimeno, V. (1985). El proceso de Hábeas corpus. Madrid: Tecnos, p.49.
- Hernández, R. (1998). Metodología de la investigación 5ta Edición México, Pag.85.
- Hernández, R. (2010) Metodología de la investigación. México, D.F.: McGraw-Hill. Interamericana Editores, p.140.
- Kelsen, H. (1982). Teoría Pura del Derecho. México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Kelsen, H. (1953). "Teoría Pura del Derecho" Revista de la Facultad de Derecho de México (abril-junio 1953).
- López, J. (2004). Derecho penal. Parte general: Introducción a la teoría jurídica del delito, Gaceta Jurídica, Lima, p.181.
- López, P. y Gómez, P. (2000). *"Investigación Criminal y Criminalística"*. Editorial Temis. Bogotá, Colombia.
- Maier, J.B.J. (2000). *"Derecho Procesal Penal Argentino"*. Editores del Puerto, Vol. I, p. 317 y 318, Buenos Aires.
- Morillas, L. (1991). Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito Madrid: Tecnos. Pág.15.
- Nolasco, V. (2011). *"Manual de Litigación en Delitos Gubernamentales"*, Ara Editores, Tomo 2, Lima.
- Neyra, J.A. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral. Primera Edición. Lima, Editorial IDEMSA. pp 425-426.
- Ore, A. (1999). Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Alternativas. Lima. Pág. 345 y 346.
- Reátegui, J. (2010). *"Más sobre el principio de Imputación necesaria"*. Gaceta Penal & Procesal Penal, N°18, Diciembre. Gaceta Jurídica. Lima.
- Reátegui, J. (2011). Hábeas corpus y Sistema Penal. Especial mención al principio de imputación necesaria en el proceso penal. Lima: Idemsa, p.19.
- Revilla, A.M. (2009). Calificación jurídica de la denuncia penal: Problemas y alternativas. Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, N° 5, pág. 200-203.
- Rodríguez, R. (2007). *"El precedente constitucional en el Perú: Entre el poder de la historia y la razón de los derechos"*. En: Estudios al precedente constitucional. Lima: Palestra Editores, pp. 62-63.

- Rodríguez, C. (1995). Las Medidas de seguridad en el ordenamiento Jurídico español. En: *"Reflexiones sobre las consecuencias jurídicas del delito. Madrid"* "Tecnos, Pág 189-209.
- Rojas, L.F. (2013). *"Balance estadístico correspondiente a la Fiscalía de Trámite de Flagrancias San José"*. Poder Judicial. Anual 2013. Costa Rica.
- Roxin, C. (2005). *"La imputación al tipo objetivo. Imputación objetiva y antijuridicidad"*. 12ª ed. Madrid España: Editorial Reus.
- Saavedra, M.J. & Flores, N.A. (2015). *"el control de la acusación como base de un debido proceso penal en el distrito judicial de Loreto: 2012 – 2014"* [Tesis de Maestría] Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
- Sánchez, J.H. (2011). *"Problemas de aplicación e interpretación de los procesos especiales"*. Lima. Gaceta Jurídica. pp 21-23.
- Sánchez, P. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Primera Edición. Lima, Editorial IDEMSA. pg 364.
- Sancinetti, M. (2001). *"La nulidad de la acusación por indeterminación y el concepto de instigación"*, Ed. AD-HOC, p. 48: Buenos Aires.
- San Martin, C. (1999). Derecho Procesal Penal Vol. II, Grijley, Lima, p. 806.
- Struensee, E. (1994). *"ACTUAR Y OMITIR, DELITOS DE COMISIÓN Y DE OMISIÓN"*. En: Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 03, Editorial Grijley, Lima – Perú, Pág. 242.
- Vanegas, P.L. (2007) y otros; Reflexiones sobre el Sistema Acusatorio, p. 235. Colombia.
- Villavicencio, F. (1990). *"Lecciones de Derecho penal. Parte general, Cultural Cuzco"*, Lima, p. 296.
- Vogler, R. (2005) *"Adversarialidad y el dominio angloamericano del proceso penal, en Constitución y sistema acusatorio"*. Universidad Externado de Colombia. P. 178 a 202.
- Zaffaroni, R. (1995). Manual de Derecho Penal. Parte General. Lima: Ediciones Jurídicas, p. 31.

ANEXOS

(ANEXO N° 01)

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN - TOCACHE, 2016.

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLE	DIMENSION	INDICADOR	INSTRU	METODOLOGIA
<p>GENERAL ¿En qué medida la imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016?</p> <p>ESPECÍFICOS A. ¿Cómo la debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016? B. ¿De qué manera la acusación fiscal se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016? C. ¿En qué medida la legislación nacional aplicable por los operadores de justicia se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache 2016?</p>	<p>GENERAL Determinar si la imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en el Distrito Judicial de San Martín - Tocache 2016.</p> <p>ESPECIFICOS A. Evaluar cómo la debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016 B. Evaluar de qué manera la acusación fiscal se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016. C. Analizar en qué medida la legislación nacional aplicable por los operadores Jurídicos se relaciona con la garantía de derechos del imputado en el Distrito Judicial de San Martín – Tocache, 2016.</p>	<p>GENERAL La imputación necesaria en el proceso inmediato se relaciona de manera positiva alta con las consecuencias jurídicas en la práctica procesal penal en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016.</p> <p>ESPECIFICAS A. La debida imputación en la incoación del proceso inmediato se relaciona significativamente con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016. B. La acusación fiscal se relaciona positivamente con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016. C. La legislación nacional aplicable por los operadores Jurídicos se relaciona de manera positiva con la garantía de derechos del imputado en la zona judicial de Tocache - San Martin, 2016.</p>	<p>V. I</p> <p>LA IMPUTACIÓN NECESARIA</p> <p>V.D</p> <p>PRACTICA PROCESAL PENAL</p>	<p>Incoación del proceso inmediato</p> <p>Acusación fiscal</p> <p>Legislación nacional</p> <p>Garantía de derechos del Imputado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La inmediatez temporal e inmediatez personal - Características del proceso inmediato - Los hechos, de una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado - La calificación jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal. - Los elementos de convicción o de prueba, que establece o acredita la hipótesis incriminatoria - Sustento de la teoría del caso del fiscal - Valoración estrategia de defensa técnica del imputado - Nuevo código procesal penal - Decreto Legislativo 1194 - Acuerdo plenario N° 2-2016/CIJ-116 - Derecho de defensa - Derecho al debido proceso - El principio de legalidad. 	<p>Cuestio nario</p>	<p>TIPO DE INVESTIGACION Básica</p> <p>ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN Cuantitativo</p> <p>NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN descriptivo – explicativo.</p> <p>DISEÑO Y DE LA INVESTIGACIÓN Diseño No experimental, descriptivo-correlacional, Transeccional.</p> <p>POBLACIÓN: abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el distrito judicial de San Martín – Tocache. 2016.</p> <p>MUESTRA: 20 abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia con proceso inmediato en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de zona judicial de Tocache Región San Martin 2017.</p> <p>TECNICA -Encuesta Ficha de encuesta</p>

FICHA DE ENCUESTA

I. DATOS INFORMATIVOS:

Apellidos y Nombres:

Proceso inmediato por delito de flagrancia.....

Año 2017 ()

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:

LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO INMEDIATO Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN - TOCACHE, 2016.

INSTRUCCIONES

El presente instrumento está estructurado en (13) ítems dirigido a los Abogados litigantes que tienen delitos con proceso inmediato, a la cual usted deberá responder marcando con una X una categoría por cada ítem, se le agradece ser lo más sincero que pueda, dejando explicito que la información suministrada será utilizada en la investigación de Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco.

Por lo que mucho agradeceré facilitarnos la información de manera concreta y real según las variables e indicadores consignados.

Muchas Gracias.

ENCUESTA TIPO CUESTIONARIO

5 =MUY DE ACUERDO

4=DE ACUERDO

3=INDIFERENTE

2= EN DESACUERDO

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO

COD	CRITERIOS POR DIMENSION E INDICADOR	ESCALA				
		1	2	3	4	5
VARIABLES						
LA IMPUTACIÓN NECESARIA						
DIMENSION: INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO INDICADORES: -La inmediatez temporal e inmediatez personal -Características del proceso inmediato						
1	¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar la inmediatez temporal e inmediatez personal en la incoación del proceso inmediato?					
2	¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con priorizar las características del proceso inmediato?					
DIMENSION: ACUSACIÓN FISCAL INDICADORES: - Los hechos, de una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado -La calificación jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal. -Los elementos de convicción o de prueba, que establece o acredita la hipótesis incriminatoria- - Sustento de la teoría del caso del fiscal -Estrategia de defensa técnica del imputado						
3	¿Los fiscales, argumentan los hechos con una descripción detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado en el proceso inmediato?					
4	¿Los fiscales realizan una adecuada calificación jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en el tipo penal que acusa?					
5	¿Los elementos de convicción o de prueba recabados por el fiscal son suficientes para acreditar la hipótesis incriminatoria en el proceso inmediato?					
6	¿Considera Ud. que el Sustento de la teoría del caso del fiscal es eficiente y eficaz para construir una imputación necesaria en el proceso inmediato?					
7	¿Considera Ud. que la estrategia de la defensa técnica del imputado es eficiente y eficaz para debatir la imputación formulada por el Fiscal en el proceso inmediato?					
DIMENSION: LEGISLACIÓN NACIONAL INDICADORES: - Nuevo código procesal penal -Decreto Legislativo 1194 -Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116						
8	Considera Ud. que el Nuevo código procesal penal es un instrumento legal suficiente que orienta los criterios jurídicos de la imputación necesaria en el proceso inmediato?					
9	¿Está de acuerdo con el actual procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato?					
10	Considera Ud. que el Acuerdo plenario N° 2- 2016/CIJ-116 es un instrumento legal que oriente los criterios de la imputación necesaria en el proceso inmediato?					
CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA PRACTICA PROCESAL PENAL						
DIMENSION: GARANTÍA DE DERECHOS DEL IMPUTADO INDICADOR: -Derecho de defensa -Derecho al debido proceso -El principio de legalidad.						
11	En su opinión ¿Cómo califica el respeto del Derecho de defensa como garantía constitucional en el proceso inmediato? 3. Muy Buena 2. Regular 1. Mala					
12	En su opinión ¿Cómo califica el respeto del Derecho al debido proceso como garantía constitucional en el proceso inmediato? 3. Muy Buena 2. Regular 1. Mala					
13	En su opinión ¿Cómo califica el respeto del principio de legalidad como garantía constitucional en el proceso inmediato? 3. Muy Buena 2. Regular 1. Mala					

.....
LA INVESVESTIGADORA

FOTOS

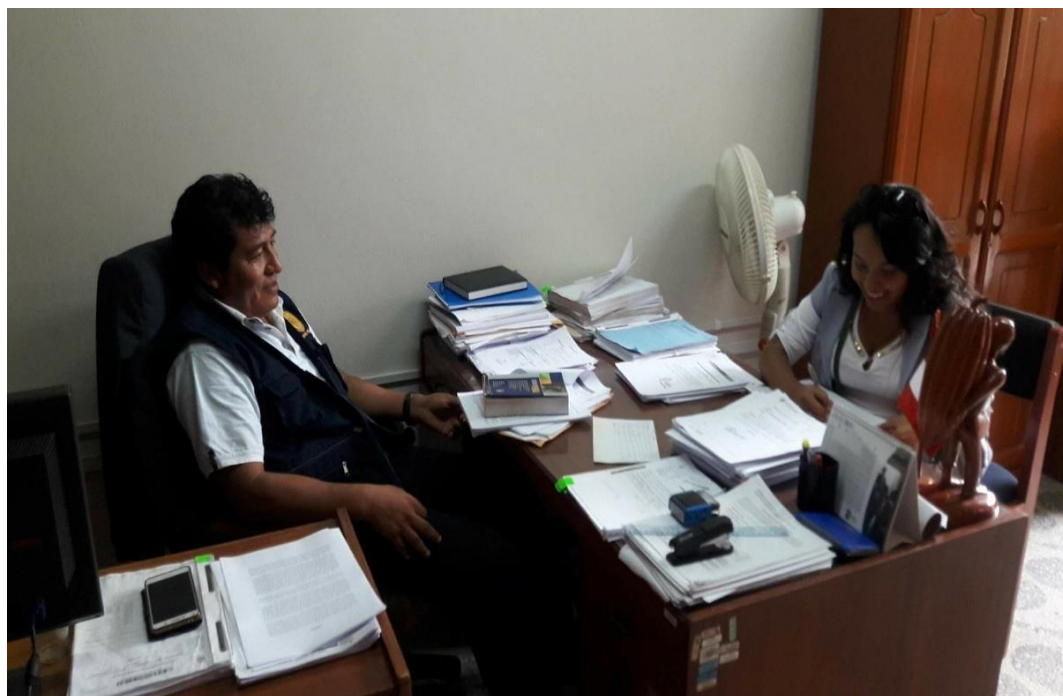


Foto 01: Muestra a investigadora recogiendo información de experto. Tocahe enero 2018



Foto 02: Muestra a investigadora recogiendo información de experta. Tocahe enero 2018



Foto 03: Muestra a investigadora recogiendo información de experto. Tocahe enero 2018



Foto 04: Muestra a investigadora recogiendo información de la fiscalía de Tocahe enero 2018



Foto 05: Muestra que recogiendo información en el poder judicial de Tocache. Enero 2018